



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

**EL CANON POR PRÉSTAMO PÚBLICO
EN LAS BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS**

MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ MARTÍN

Dirigido por:

GENARO LUIS GARCÍA LÓPEZ

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
FACULTAD DE TRADUCCIÓN Y DOCUMENTACIÓN
GRADO EN INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Trabajo de Fin de Grado



**VNiVERSiDAD
D SALAMANCA**

EL CANON POR PRÉSTAMO PÚBLICO EN LAS BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS

MARÍA VICTORIA RODRÍGUEZ MARTÍN

Dirigido por:

GENARO LUIS GARCÍA LÓPEZ

Vº Bº

Salamanca, 2016

RODRÍGUEZ MARTÍN, María Victoria

El canon por préstamo público en las bibliotecas españolas / María Victoria Rodríguez Martín; dirigido por Genaro Luis García López. – Salamanca: Universidad de Salamanca, Facultad de Traducción y Documentación, 2016.

82 p.

Trabajo de Fin de Grado – Grado en Información y Documentación

1. Propiedad Intelectual–España. 2. Bibliotecas–Préstamo, Sistemas de–España. 3. Bibliotecarios–España–Ética profesional I. García López, Genaro Luis, dir. II. Título

024.6 : 347.78 (460)

023.4/.5 : 174 (460)

Resumen:

El tema de este trabajo es el llamado Canon por préstamo público en las bibliotecas españolas, es decir, el impuesto que las bibliotecas deben pagar a las entidades privadas que velan por los derechos de los autores. Se muestra en particular el funcionamiento de CEDRO, la principal Sociedad de gestión de este tipo avalada por los poderes públicos. Y se hace especial hincapié en cómo los principios morales y la ética de los profesionales de las bibliotecas les ha llevado a oponerse firmemente contra el canon. El trabajo termina presentando la Resiliencia como una habilidad que la autora considera fundamental para cualquier profesional de la biblioteconomía.

Palabras clave: Propiedad intelectual, Canon bibliotecas, Activismo bibliotecario, Compromiso social, Ética bibliotecaria, Resiliencia en bibliotecas

Abstract:

It analyzes the so called Canon for public borrowing in the Spanish libraries, this is, the tax that libraries must pay to public entities in charge of looking after the rights of authors. It shows the functioning of CEDRO, the main Society of management of this kind supported by public powers. It emphasizes how the moral principles and the ethics of librarians have led them to firmly stand up against the canon. The work finishes presenting the Resilience as a skill that the author considers crucial for any professional in the field of Library Science.

Keywords: Intellectual property, Canon for public libraries, Librarian activism, Social commitment, Ethics for librarians, Resilient librarian

Índice:

Capítulo 1. Introducción, Justificación, Objetivos y Metodología	7
1.1. Introducción	7
1.2. Justificación	8
1.3. Objetivos	9
1.4. Metodología	12
Capítulo 2. Marco Teórico	13
Capítulo 3. ¿Qué es el canon por libro prestado?	17
Capítulo 4. ¿Por qué esta remuneración ahora?	17
Capítulo 5. Origen y cronología del polémico canon	17
5.1. Origen: Directiva 92/100/CEE y Directiva 2006/115/CE	17
5.2. Cronología	19
Capítulo 6. ¿Quién asume y gestiona esta remuneración?	20
Capítulo 7. Gestión colectiva del derecho de autor: Las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor	21
7.1. Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO)	21
7.2. Remuneración por préstamo público	23
7.3. ¿Cómo gestiona CEDRO el dinero cobrado por préstamo público?	24
7.4. CEDRO y el canon sobre las Universidades	26
Capítulo 8. Todos contra el canon: Acciones profesionales reivindicativas y repercusión social	29
8.1. Escritores contra el canon	31
8.2. Editores contra el canon	32
8.3. Asociaciones de bibliotecarios contra el canon	33

8.3.1. Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID)	33
8.3.2. Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD)	34
8.3.3. Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA)	34
8.3.4. Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB)	35
8.3.5. Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas	35
8.4. Profesores universitarios españoles contra el pago por préstamo en bibliotecas	35
8.5. Ayuntamientos contra el canon	36
8.6. Marea Amarilla	43
8.7. El Grupo de Activismo Social (GAS) contra el canon	44
8.8. Firmas contra el préstamo de pago en bibliotecas	44
Capítulo 9. Bibliotecas públicas y derechos humanos	45
Capítulo 10. Resiliencia, una habilidad necesaria en los bibliotecarios	51
Capítulo 11. Conclusiones	54
Capítulo 12. Bibliografía y Fuentes	57
Capítulo 13. Anexos	64
Anexo 1. Manifiesto de autores en defensa del préstamo en bibliotecas	64
Anexo 2. Manifiesto de editores contra el canon por préstamo de libros	64
Anexo 3. Manifiesto de profesores de enseñanza	65
Anexo 4. Manifiesto del GAS	66
Anexo 5. José Luis Sampedro. Por la lectura	67
Anexo 6. Sentencia del Tribunal Supremo 2040/2016	68
Anexo 7. Las 12 razones para amar las bibliotecas públicas	81

1. Introducción, Justificación, Objetivos y Metodología

1.1. Introducción

Este trabajo pone el punto final al Curso de Adaptación al Grado en Información y Documentación que cursé durante el año 2014-2015. A la hora de decidir qué profesor podría dirigirme en esta tarea, se me plantearon algunas dudas. Sin embargo, ya que llevo 17 años trabajando en el Servicio Central de Bibliotecas de la Universidad de Salamanca en tareas de proceso técnico de catalogación, clasificación y mantenimiento del catálogo de autoridades, pensé que lo mejor sería elegir a alguno de los profesores que habían impartido las asignaturas que más tenían que ver precisamente con las tareas a las que llevo dedicada tanto tiempo, es decir, con la Descripción, Organización y Recuperación de la Información. Así pues, y tal como nos habían indicado que teníamos que proceder, fui poniendo por orden de preferencia a todos los profesores que nos habían impartido clases en ese año. Cuando nos comunicaron el resultado de la adjudicación de tutor, me llevé una sorpresa al comprobar que sería el profesor de la asignatura de Ética de la Información y la Documentación, la persona que me encaminaría en esta labor.

Cuando cursé la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación en el año 1991, esta asignatura no existía en el Plan de Estudios. Los alumnos que terminamos los estudios y nos incorporamos al mercado laboral no teníamos un Código Deontológico propio de nuestra profesión, y era el día a día en nuestro trabajo el que nos iba enseñando y formando en nuestros propios códigos de conducta. Para nosotros, profesionales de las bibliotecas que trabajamos con información, es importante saber cómo debemos gestionarla ya que de ello depende el que los ciudadanos puedan acceder a ella. También es necesario que tengamos la capacidad de identificar y resolver los conflictos éticos que puedan surgir en el día a día del ejercicio de nuestra labor. Por esta razón, en los últimos años de la década de los 90 es cuando empiezan a aparecer códigos deontológicos en países e instituciones que todavía no los tenían y se revisan los que existían desde hacía tiempo. Igualmente empieza a incorporarse la ética de la información como nueva asignatura en los estudios de la licenciatura en Documentación de algunas Universidades, de modo que los alumnos lleguen a adquirir una orientación socialmente responsable en su forma de actuar.

El desarrollo y uso que las nuevas tecnologías de la información están teniendo en nuestra sociedad actual, y en nuestra profesión, hace que se nos planteen determinadas cuestiones éticas relacionadas con: la conservación y difusión de la información, la privacidad, el derecho a la información, la gestión de los derechos de

autor, la gestión de datos personales y el debate suscitado en relación al cobro por determinados servicios en las bibliotecas.

Y es precisamente este último punto, el que me dio la idea para elegir el tema de mi trabajo: **el canon por préstamo público en las bibliotecas**.

Dentro de los contenidos marcados en el plan de estudios para la asignatura de Ética de la información y la documentación están: el derecho de acceso a la información, una biblioteconomía comprometida y la biblioteca como agente de transformación, integración social, democratización y formación de ciudadanos. A lo largo del curso el profesor de esta asignatura nos enseñó, entre otras cosas, a valorar la importancia del libre acceso a la información por parte de todos los ciudadanos y a comprender la importancia de nuestra profesión en un mundo globalizado.

El que todos los ciudadanos puedan acceder libremente a la información para poder participar de la vida democrática, es un derecho en el que, no sólo están implicados los medios de comunicación, sino también las bibliotecas.

Pero en una sociedad global, como la nuestra, que tiende, cada vez más, hacia el capitalismo puro y duro, y en la que se da prioridad al poder de los más fuertes, vemos cómo este derecho está siendo amenazado por considerar la información como una mercancía y privatizar servicios que hasta ahora eran públicos.

Esta situación genera malestar que se materializa en movilizaciones y acciones por parte de un colectivo, el de los bibliotecarios, muy comprometido socialmente y que trata de frenar el que las bibliotecas, que fueron concebidas para garantizar unos servicios sociales, acaben siendo absorbidas por las zarpas del neoliberalismo y el capitalismo.

1.2. Justificación

La advertencia que la Comisión Europea¹ hace en el año 2004, por no haber hecho correctamente la transposición de una Directiva sobre el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras, provoca una fuerte reacción social en España y por primera vez las bibliotecas son noticia en decenas de periódicos, radios, televisiones, blogs y foros.

Los bibliotecarios se movilizan como nunca antes se había visto y salen a la calle para protestar en contra de una medida que, sin duda, supone un grave perjuicio tanto

¹ La Comisión Europea inicia los procedimientos de infracción contra seis estados miembros en relación con la armonización de su implementación nacional del derecho de préstamo público a la directiva 92/100. Según su nota de prensa de 16 de enero de 2004 (IPO4/60) la intención de la Comisión Europea es poner fin a los perjuicios producidos a los derechohabientes por las leyes de España, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal.

para las bibliotecas como también para los usuarios a los que prestan sus servicios. Apoyados por escritores, editores, profesores, asociaciones profesionales y ciudadanos, recogen firmas, organizan debates, convocan concentraciones, crean plataformas en contra de la aplicación de un canon que consideran injusto y completamente abusivo, y que lo que realmente persigue es acabar privatizando un servicio público imprescindible como el que prestan las bibliotecas.

Los desarrollos legislativos, que en materia de propiedad intelectual se están llevando a cabo en la actualidad legalizan la práctica de actuaciones abusivas por parte de las entidades que, amparándose en su función como defensoras de los derechos de los autores lo que están haciendo, en realidad, es poner barreras a la libertad de información.

Con este trabajo he querido hacer un repaso por todas aquellas acciones que surgieron en contra de la aplicación del canon a las bibliotecas, recogiendo las opiniones y reflexiones que las partes implicadas argumentaban para no aceptarlo y aportando también las mías.

Pero el canon por préstamo público es sólo un eslabón más de una amplia cadena de políticas de austeridad, que desde que comenzó la crisis en 2008, están derivando en la pérdida de algunos servicios públicos y en el deterioro de la calidad de otros. Por otro lado, el desarrollo acelerado de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación abre la puerta a un sinfín de usos y abusos en el uso de las mismas que está derivando en la pérdida de valores morales, por lo que la ética se convierte en referencia obligada para guiar nuestros pasos en nuestra profesión.

Las decisiones políticas actuales tratan de imponer un modelo económico global, que antepone y defiende valores económicos frente a valores sociales y el mundo de las bibliotecas no está siendo ajeno a esta potente fuerza que nos coloca "ante el principal desafío del mundo contemporáneo: la desaparición de los valores democráticos aplastados por la apisonadora del mundialismo" (Bois, 2004, p. 45).²

Esta situación debe hacernos reflexionar y tomar conciencia, más que nunca, del compromiso social que adquiere el ejercicio de nuestra profesión en una época en la que, la cultura y la información parece que dejan de estar al alcance de todos.

1.3. Objetivos

Derechos Humanos, Educación, Ciudadanía y Democracia, son conceptos estrechamente vinculados a los servicios que deben prestar las Bibliotecas Públicas. Y son estas instituciones las que se encargan de hacer cumplir parte de los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948).

² En su libro Bois no se limita a analizar sino que invita también al compromiso social para cambiar el orden de las cosas.

El artículo 2 de esta Declaración (1948) dice que los derechos proclamados en ella serán disfrutados sin ninguna distinción por razón de raza, religión, origen nacional, posición económica, etc. Es evidente que el establecimiento de tasas para acceder a la información y a la cultura contraviene este artículo y dificulta a las personas más indefensas económicamente el disfrute de estos derechos.

Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todas las personas, cuya base es el principio de respeto por el individuo. Y como seres morales y racionales que somos merecemos ser tratados con dignidad, sin ningún tipo de discriminación y tener las mismas libertades y oportunidades que nos permitan integrarnos en la sociedad. El respeto por estos derechos y libertades viene dado por una enseñanza y una educación, que no sólo nos brindan, desde muy pequeños, la familia y la escuela, sino también la biblioteca pública, lugar de encuentro abierto a todos los ciudadanos donde la lectura y los libros, son accesibles a todos sin distinción alguna. A través de los libros, cuyas palabras en ellos escritas, nos hacen pensar, reflexionar, entender, imaginar, etc., nos nutrimos de ideas que nos permiten expresarnos, relacionarnos, adquirir capacidad crítica, forjar nuestra personalidad y comprender y respetar otras opiniones diferentes a las propias. Mientras leemos, ya sea por obligación como por entretenimiento, ejercitamos nuestra mente y hacemos que nuestro cerebro progrese y que siga vivo. La lectura es cultura, y la cultura permite la participación ciudadana en la democracia.

En palabras de Betancur (1997, p. 18) "no hay democracia sin participación y no se participa sin la información suficiente y pertinente para ejercer con plenitud este derecho; el centro bibliotecario se constituye en un agente coparticipante en la realización del proyecto social de una nación".

Este trabajo pretende mostrar cómo las bibliotecas y sus profesionales se han enfrentado a unas decisiones institucionales que deterioran los servicios bibliotecarios. Y cómo los bibliotecarios, hoy más que nunca, tienen que recordar y transmitir no sólo la viabilidad económica, sino también el valor social, cultural y educativo de estas instituciones a las que representan y reafirmarse en que "la participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una educación satisfactoria como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la información" (IFLA/UNESCO, 1994).

Desgraciadamente las bibliotecas han sido siempre las grandes olvidadas en los presupuestos generales del Estado³, lo que demuestra la falta de interés por parte del gobierno español en el ámbito bibliotecario. Así, sin los medios y recursos suficientes, para estas instituciones es difícil poder desarrollar las funciones que tienen

³ El programa de Bibliotecas y archivos es un año más el gran perjudicado de la partida con 67,90 millones de euros, frente a los 69,88 millones de euros de 2014 y los 78,42 de 2013. El descenso es continuado.

encomendadas. Sin embargo, la implicación ética asentada en el fuerte compromiso social que muchos de los bibliotecarios tienen con sus usuarios, ha conseguido suplir en muchas ocasiones esta escasez y falta de medios.

Es importante que no queden en el olvido todos los movimientos sociales y los esfuerzos que desde las distintas asociaciones profesionales y organismos, tanto nacionales como internacionales, se llevan a cabo para seguir insistiendo en el papel tan importante que las bibliotecas públicas han tenido, tienen y deben seguir teniendo dentro de sus comunidades como responsables de la integración y el mantenimiento de la identidad y la cohesión social.

Como igualmente importante es que no quede en el olvido el compromiso ciudadano y la responsabilidad social de los bibliotecarios, demostrando que estos valores, que sólo empleamos en nuestros ratos libres porque nos parece que están mal vistos, están en realidad, muy vinculados a nuestro ejercicio profesional. Porque el ejercicio de una profesión "constituye la principal responsabilidad y aportación del ciudadano a la comunidad" (Cobo Suero, 2003, p. 360).

"Vivimos unos años en que actuar es difícil, pero imprescindible. Es un momento para el activismo bibliotecario" (Gómez Hernández, 2013, p. 51). La crisis económica que estamos sufriendo, se afronta con una serie de reformas y medidas que suponen una reducción grave en la inversión de las instituciones públicas y de los servicios que éstas ofrecen a la ciudadanía, lo que genera exclusión y desigualdad social. No sólo la sanidad y la educación, también las bibliotecas están sufriendo esta caída en la inversión y tienen que afrontar serios problemas: falta de renovación de infraestructuras y tecnologías, dificultad para seguir avanzando e innovando, amenaza de reducción de horarios y servicios, así como de personal, usuarios desempleados, falta de financiación para programas culturales y mantenimiento de colecciones, y así hasta el cierre de algunas bibliotecas. Y por si esto no fuese ya suficiente, ahora las bibliotecas públicas municipales tienen que pagar un canon en concepto de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras. Ante este panorama, no podemos quedarnos parados mirando cómo se suceden los acontecimientos. Tenemos que saber cómo ser útiles y encarar los problemas de forma positiva, convertirnos en bibliotecarios resilientes⁴. Así pues, es el momento de fortalecer lazos, de tomar decisiones colectivas, de generar foros de comunicación, de convertirnos en bibliotecarios activistas comprometidos con nuestra profesión e intentar cambiar una realidad que está poniendo barreras a derechos fundamentales como son el acceso libre a la información y a la cultura por parte de la ciudadanía.

⁴ Las bibliotecas son una pequeña parte dentro de otros sistemas más complejos como: el editorial, el académico, el de la propiedad intelectual, el de las tecnologías..., y todos ellos están experimentando grandes cambios. La resiliencia, aplicada al mundo de las bibliotecas, nos enseña a aceptar que los cambios son irreversibles y a buscar, pues, la manera de adaptarnos a ellos.

1.4. Metodología

La primera fase para poder desarrollar este trabajo ha consistido en buscar, seleccionar, organizar y estudiar la información disponible sobre el tema a tratar. La información referente al canon por préstamo en bibliotecas públicas es mucha, sobre todo, en lo que se refiere a noticias aparecidas en medios de comunicación digitales, ya que ha tenido mucha repercusión mediática, así como en las páginas web e informes de las distintas Asociaciones Profesionales de Bibliotecarios. También son muchos los artículos publicados por profesionales de las bibliotecas en diferentes revistas especializadas, quienes han dado a conocer sus opiniones y argumentos sobre el canon, adecuadamente referenciados al final del trabajo.

Está estructurado de forma cronológica, por lo que después de fundamentar cuál ha sido el motivo y el propósito de hacer un estudio sobre este tema, y de contextualizarlo en el marco teórico, he optado por empezar explicando el origen que ha llevado a que nuestros políticos acaben tomando la decisión impuesta, primero, por Real Decreto y convertida, finalmente, en Ley, de que las bibliotecas públicas paguen un canon en concepto de remuneración a los autores por el préstamo que hacen de sus obras.

El origen, que fue una Directiva Europea de 1992⁵, dio lugar a toda una serie de acciones y movilizaciones por parte de las partes afectadas, que he agrupado por colectivos y fecha en que se fueron sucediendo. Al ser muchas, he recogido las que he considerado más significativas y relevantes.

Pero además he querido que el tema sobre el canon sirva para analizar y reafirmar el espíritu de compromiso social y de ética profesional que adquiere el ejercicio de nuestra profesión en una sociedad con una importante pérdida de valores morales y concienciar a todos los bibliotecarios de que las instituciones a las que representamos son imprescindibles en una sociedad democrática y del estado del bienestar. Por eso he incluido dos capítulos finales, uno referente a las Bibliotecas Públicas y Derechos Humanos y, otro, referente a la Resiliencia Bibliotecaria.

He incluido un apartado de Anexos que recoge los Manifiestos que firmaron en su día las partes implicadas mostrando su oposición al canon por préstamo. En este apartado recojo igualmente la reciente sentencia, que con fecha 18 de mayo de 2016, el Tribunal Supremo ha fallado en contra del recurso interpuesto en su día por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares contra el RD 624/2014, de 18 de julio, por el

⁵ Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo de obras, derogada y sustituida a efectos de codificación por la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

que se desarrolló el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

2. Marco Teórico:

Vivimos en una época de importantes cambios en cuanto a la forma de generar, distribuir y obtener información. La aparición de los documentos electrónicos y la digitalización de los materiales han propiciado que las ya tradicionales normas sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual tengan que adaptarse al nuevo entorno tecnológico y estén cada vez más presentes en los ámbitos social, educativo, económico, y, cómo no, en el bibliotecario.

Los derechos de propiedad intelectual siempre han tratado de conjugar el derecho que tienen los autores a que se les reconozca como creadores de la obra (derecho moral) y el derecho derivado de la explotación de la misma (derecho económico), con el derecho que tienen todos los ciudadanos de poder acceder libremente a la información, a la cultura y a la lectura pública. Y son precisamente las bibliotecas, y en particular las bibliotecas públicas, las instituciones encargadas de proporcionar y garantizar este derecho. Los bibliotecarios y ,cualquier persona que trabaja con material bibliográfico y que pone la información a disposición de los ciudadanos, deben conocer la legislación referida a estos derechos para saber qué límites se establecen en el acceso a la misma. Pero lo que estos profesionales no se imaginaban es que las bibliotecas públicas tuvieran que acabar pagando un canon por uno de los servicios básicos y de mayor uso que ofrecen: el de préstamo individual (art. 13.4 Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas 10/2007, de 22 de junio). Y aunque este asunto llevaba años gestándose y, en un principio no parecía muy amenazador, finalmente ha acabado imponiéndose.

El derecho de préstamo público está ligado a la aparición y desarrollo de las Bibliotecas Públicas en el siglo XIX. Hasta ese momento, sólo existían bibliotecas privadas que prestaban sus libros a cambio de la cuota que pagaban sus socios. Y el tema de los derechos de autor no fue una materia regulada por la legislación europea hasta la aprobación del Libro verde sobre derechos de autor de 1988⁶. Libro en el que, sin embargo, no se hacía referencia a la necesidad de regular un tipo de préstamo que no fuera el puramente comercial.

⁶ El Libro Verde sobre derechos de autor de 1988 fue el primer documento de la Comisión que abordó la necesidad de armonización en el ámbito de los derechos de autor y derechos afines en un marco conceptual. Estaba dividido en siete capítulos, en los que se describían y analizaban los ámbitos en que la Comisión consideraba que era necesario actuar. El capítulo 4 estaba dedicado al derecho de distribución, el agotamiento y el derecho de alquiler, mientras que el capítulo 2 versaba sobre la piratería. Es precisamente en esos dos capítulos en los que tiene su origen la Directiva.

Con la ayuda estatal cada vez mayor a las bibliotecas públicas, el número de obras prestadas fue en aumento, las bibliotecas privadas desaparecieron y fue entonces cuando los autores empezaron a solicitar una remuneración por la utilización de sus obras. Sin embargo esta demanda no fue atendida por los legisladores, al menos no inmediatamente, ya que las bibliotecas públicas son precisamente las que dan visibilidad a sus creaciones, haciendo que se les conozca, son el escaparate perfecto y la mejor campaña publicitaria que un autor y su obra pueden tener.

La biblioteca pública nace precisamente de la convicción de que toda sociedad tiene el derecho y la necesidad de acceder al conocimiento y participar de él y, por eso mismo, abre sus puertas a todos cuantos quieran acceder a ella de manera libre y gratuita, sin ningún tipo de discriminación, tal y como se expresa en el Manifiesto sobre la Biblioteca Pública (IFLA/UNESCO, 1994). Son las instituciones que más favorecen la creación, la conservan y la difunden a través de una gran diversidad de servicios sin ningún ánimo de lucro.⁷

Por su parte, las Directrices para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (IFLA/UNESCO, 2001) atribuyen a estas instituciones una serie de funciones entre las que destacan:

- La educación y la instrucción, proporcionando los materiales adecuados para apoyar el aprendizaje escolar y extraescolar y formar a los usuarios de manera eficaz, durante todas las etapas de su vida.

- Crear y fomentar el hábito por la lectura.

- El derecho primordial de acceso a la información, derecho en el que las bibliotecas públicas desempeñan un papel fundamental a la hora de recogerla, organizarla y explotarla.

- Servir al progreso cultural de la comunidad.

⁷ Estas son las cinco leyes del bibliotecario indio Ranganathan en las que se basa el espíritu de la moderna Biblioteconomía :

1. Los libros están para usarse.
2. A cada lector su libro.
3. A cada libro su lector.
4. Hay que ahorrar tiempo al lector.
5. La biblioteca es un organismo en crecimiento.

- Cumplir una función social, al ser un espacio público que sirve como lugar de encuentro.

- Libertad de información. Cualquier opinión y experiencia humana tienen que tener cabida en la biblioteca, sin que puedan ser censuradas por razones ideológicas, políticas o religiosas.

- Los servicios que ofrecen deben estar a disposición de todas las personas.

Entonces, si estos servicios deben ser gratuitos, ya que cobrar por ellos marginaría a las personas que tienen menos recursos económicos y significaría coartarles su legítimo derecho de acceso a la información ¿cómo es que en el siglo XXI, se nos obliga a retroceder a una época en la que las bibliotecas eran sólo para unos pocos privilegiados?⁸

La misión de las bibliotecas públicas, desde su origen, ha ido variando y adaptándose según la historia y el desarrollo de los hombres. En sus comienzos, fueron instituciones ligadas a grupos reducidos de personas cultas y con poder, hasta convertirse, a día de hoy, en instituciones que ejercen una labor fundamental en el desarrollo y mantenimiento de una sociedad democrática. Las bibliotecas fomentan la lectura, apoyan la educación, la cultura y contribuyen al desarrollo personal.

La llegada del canon bibliotecario a España, a raíz de un Real Decreto aprobado en julio de 2014, ha originado un importante debate con opiniones encontradas entre autores, editores, bibliotecarios, usuarios y las entidades de gestión de derechos de autor. Y desde entonces no han faltado las acciones reivindicativas por parte de las Asociaciones de Bibliotecarios denunciando este abuso.

Merlo Vega (2014, p. 12) en un interesante artículo respecto al canon, critica que "se considere a las bibliotecas como entidades que perjudican económicamente a los autores". Es falso que este canon se establezca para proteger los derechos de los autores, como defienden las sociedades gestoras de los mismos, ya que las bibliotecas ya pagan por este concepto cuando adquieren cualquier obra sujeta a Depósito Legal. Más bien se diría, que estas sociedades, pretenden enriquecerse a costa de uno de los servicios básicos del que vienen disfrutando todos los usuarios de las bibliotecas públicas: el servicio de préstamo. Si la lectura es un derecho y la herramienta básica

⁸ Las revoluciones francesa y americana, supusieron el inicio de la extensión por Europa y América de nuevos principios democráticos y conllevaron el nacimiento de una voluntad de hacer accesible la cultura y la educación para todos. Para las bibliotecas, esto supuso el inicio de un proceso de desamortización que se extendió por todo el continente y que transfirió a la sociedad un inmenso tesoro bibliográfico procedente de las instituciones del Antiguo Régimen, especialmente la Iglesia Católica. Pese a todo, este anhelo de acercar la cultura al conjunto de la sociedad no consiguió hacerse realidad hasta mediados del siglo XIX, con la aparición en el mundo anglosajón de la Biblioteca Pública tal y como la conocemos..

que nos proporciona los conocimientos y la habilidad necesarios para poder convivir en democracia y así poder disfrutar, en igualdad de condiciones, de la sociedad de la información, **¿por qué ahora hay que pagar por un derecho que es fundamental para nuestra cultura y educación?**. Además, estas sociedades dicen actuar en nombre de todos los autores, cuando son muchos los que han alzado su voz crítica contra este canon, en el que no ven precisamente un beneficio económico. Son conscientes de que gravar a las bibliotecas con esta tasa repercutirá negativamente en el desarrollo de sus colecciones y, por consiguiente, sus obras no tendrán la visibilidad y difusión que hasta ahora estas instituciones les han estado brindando.

Es cierto que la regulación de la propiedad intelectual debe basarse en un elevado nivel de protección de los derechos de autor y sus derechos conexos, ya que éstos proporcionan los recursos económicos necesarios para seguir asegurando la creación y la producción cultural. Pero frente a estos derechos existen otros derechos sociales, no menos importantes y muy necesarios. Todos tenemos derecho a participar de la vida cultural y a poder acceder al conocimiento libremente. Precisamente a esto aludió en su momento Federico García Lorca cuando durante el discurso que pronunció con motivo de la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, su pueblo natal, criticaba que primaran siempre los intereses económicos y reivindicaba la necesidad de que las personas se empaparan del saber y de la cultura.

Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas, pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita y ¿dónde están esos libros? (García Lorca, 1931, p. 50).⁹

¿Porqué van a ser más importantes los intereses económicos de unos pocos frente a los intereses culturales de toda una sociedad?, ¿Cómo se puede llegar a pensar que las bibliotecas perjudican a los escritores?, ¿Tiene que ser el derecho de autor la única forma de asegurar ingresos económicos suficientes a los autores? En este sentido, lo ideal sería llegar a un consenso en el que los autores no vean perjudicados sus derechos y las bibliotecas puedan seguir ofreciendo sus servicios de manera gratuita y seguir contribuyendo a crear lectores y nuevos creadores.

Las bibliotecas han sido y siguen siendo en muchas ocasiones refugio para los más vulnerables, pueden ayudar a las personas a comprender mejor el mundo en el que viven gracias al acceso a la cultura y a la información. "Comprender mejor el

⁹ El texto que Federico García Lorca escribió y leyó en la inauguración de la biblioteca de su pueblo, Fuente Vaqueros, en septiembre del año 1931, es una de las defensas más fuertes, sencillas y emotivas que pueden encontrarse sobre la importancia de las bibliotecas.

mundo no sólo nos prepara mejor para enfrentarnos a él, sino, lo que es más importante, para mejorarlo" (López López, 2014a).

La implantación de este canon por préstamo de libros y otros materiales a las bibliotecas mercantiliza un servicio hasta ahora público y sin ningún ánimo de lucro. Así pues, damos un paso atrás, otra señal más de las reducciones paulatinas en servicios públicos a las que se enfrenta nuestra sociedad en la actualidad y que tanto esfuerzo había costado conseguir.

3. ¿Qué es el canon por libro prestado?

Se trata de la remuneración que, por libro con destino a préstamo y usuario activo, tienen que pagar las bibliotecas públicas de municipios de más de 5.000 habitantes a las sociedades de gestión de derechos de autor, según lo dispuesto por el Real Decreto publicado el 1 de agosto de 2014 por el Gobierno Central y que da cumplimiento a una Directiva Europea de 1992.

4. ¿Por qué esta remuneración ahora?

Debido al rápido avance que las nuevas tecnologías han tenido en el mundo de la información, en la actualidad es muy fácil reproducir contenidos en soporte digital y ya no son sólo los libros impresos los que forman parte de la colección de fondos de las bibliotecas, sino que podemos encontrar en ellas obras en variedad de formatos.

Esto ha provocado que las sociedades que representan a los autores hayan interpuesto sus quejas ante los organismos españoles y europeos competentes, por considerar que se les está causando un grave perjuicio por el uso que de sus obras se hace en estos establecimientos de acceso público.

5. Origen y cronología del polémico canon

5.1 Origen: Directiva 92/100/CE [derogada] y Directiva 2006/115/CE

Todo comenzó cuando el Consejo de las Comunidades Europeas adoptó la Directiva 92/100, derogada posteriormente por la Directiva 2006/115, sobre Derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

El derecho de préstamo público se define en la Directiva como un derecho exclusivo de autorizar o prohibir el préstamo público con o sin contraprestación económica.

Dicha Directiva pretendía que el derecho de remuneración a los autores por el préstamo de sus obras se regulara de manera más homogénea por las legislaciones de los países miembros. Algunos países llevaban ya años pagando una remuneración compensatoria a sus autores nacionales por el temor de que la creación intelectual autóctona desapareciera ante el aumento de importaciones de libros en lengua inglesa. Es el caso, por ejemplo, de Dinamarca (1946), Suecia (1955) o Finlandia (1961). Después de ellos también lo establecieron Países Bajos (1971), Alemania (1972) y Reino Unido (1979/1982). Sin embargo, los sistemas bibliotecarios de estos países no son comparables con los nuestros. En Finlandia, por ejemplo, cada finlandés lee una media de 47 libros al año, mientras que en España la media es de 10¹⁰. Como tampoco es comparable su alto nivel de educación general, apoyado desde la época escolar por un excelente sistema de bibliotecas que se encarga de promover y facilitar la lectura y que, además, es uno de los servicios públicos más populares, si no el que más (Manrique Sabogal, 2014). Incluso la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) han incluido dentro de sus pautas y recomendaciones para bibliotecas, los parámetros alcanzados en los países nórdicos como ejemplo a seguir por las administraciones españolas.

Resulta curioso que nunca en estos años las administraciones españolas competentes hayan mostrado interés en que nuestras bibliotecas lleguen a equipararse con las de estos países en objetivos tan imprescindibles como son:

- El mantenimiento y construcción de nuevas instalaciones.
- La renovación de las colecciones bibliográficas, que se han ido quedado obsoletas y muy deterioradas por el uso.
- Dotar a las bibliotecas de presupuesto suficiente. Todavía existen bibliotecas sin automatizar.
- La falta de personal..., y muchos otros que podría enumerar.

Pero ahora sí tengan prisa porque nos igualemos a ellos en un tema tan desfavorable para nuestras ya de por sí desfavorecidas bibliotecas públicas, como es el canon.

La Directiva sintetiza que ningún autor puede negarse a que se presten sus obras en beneficio del desarrollo cultural al mismo tiempo que el Estado tiene la obligación de remunerarles por ello. Y a pesar de no gustar, finalmente fue aprobada al establecerse una serie de excepciones entre las que cabía destacar que los Estados

¹⁰ Según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas durante el año 2015 la media de libros leídos por cada español fue de 8.6.

miembros podían eximir a determinadas categorías de establecimientos del pago de la remuneración (art. 6.3 Dir. 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006).

5.2 Cronología

En el año **1994** España adapta la Directiva Europea, pero haciendo uso de la posibilidad de eximir a determinadas instituciones (art. 5.3 Dir. 92/100/CE) lo que incluye a museos, archivos, hemerotecas, fonotecas y videotecas que pertenezcan a organismos de interés público de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, y establecimientos educativos que pertenezcan al sistema educativo español; esta lista incluye, de hecho, a la mayor parte de las instituciones de préstamo abiertas al público.

Años después, el 16 de enero de **2004**, y puesto que muchos de los países seguían sin transponer la directiva a sus legislaciones nacionales o lo habían hecho incorrectamente, la Comisión Europea inicia procedimientos de infracción contra seis estados miembros: España, Francia, Italia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. Esta decisión provoca movilizaciones por parte de los bibliotecarios, muy comprometidos con la comunidad a la que sirven, y surgen plataformas en contra del canon, se escriben manifiestos, se recogen firmas, el tema es noticia en medios de comunicación, y blogs y foros no sólo bibliotecarios.¹¹

El 26 de octubre de **2006** el Tribunal Superior de la Unión Europea condena a España, con una amenaza de multa, y le obliga a cambiar la regulación del préstamo, a la vez que se aprueba una nueva Directiva que actualiza y viene a derogar a la anterior de 1992, la Directiva 2006/115/CE.

En **2007** España adapta la Directiva europea con la aprobación de la **Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas**, al final de la cual figuran las Modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual y que se resumen en que las instituciones públicas y centros del sistema cultural no necesitan la autorización de los titulares de los derechos por los préstamos que realicen pero sí tienen que remunerarles en la cuantía que se determine mediante la aprobación de un Real Decreto y esta remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual. Se exime del pago a las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes y a las de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español. El Real Decreto debe ser promulgado en el

¹¹ 2004 es el año en el que se celebran las Primeras Jornadas Contra el Pago por el Préstamo en la Biblioteca Pública de Guadalajara. Este encuentro entre bibliotecarios va a suponer un motor importante para el desarrollo de la campaña contra el canon y moviliza también a los autores. Su participación, y su solidaridad con esta causa, hacen que se multiplique la presencia de las bibliotecas en todos los medios de comunicación

plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley y hasta entonces se establece que la cuantía a pagar sea de 0,2 euros por cada ejemplar de obra adquirido con destino al préstamo.

Si una biblioteca, por ejemplo, compra 200.000 ejemplares en un año, tiene que pagar a la entidad de gestión, CEDRO, 40.000 euros.

En **2008** tendría que haberse aprobado el Real Decreto que establecería la cuantía de los pagos y quién y de qué forma la llevaría a efecto, pero no se llegó a aprobar debido, principalmente, a la dejadez del legislativo.

En **2014** el Gobierno de España aprueba finalmente el **Real Decreto 624/2014, de 18 de julio**, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público y que tiene por objeto establecer el procedimiento de pago y el cálculo de la cuantía, que viene a desarrollar y completar lo establecido en la Ley de 2007. Quedan eximidas del pago las bibliotecas de municipios de menos de 5.000 habitantes, incluyendo los bibliobuses cuando realicen el préstamo en dichos municipios, y las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, así como tampoco generan derecho de remuneración: las consultas in situ de los documentos, el préstamo interbibliotecario ni los préstamos a personas con discapacidad.

Así, desde agosto de 2014 y hasta diciembre de 2015, las administraciones tienen que pagar 0,16 euros por cada ejemplar comprado al año más 0,05 euros por cada usuario activo al año. Si una biblioteca compra, por ejemplo, 200.000 ejemplares debe pagar 32.000 euros, y si además tiene 1000 socios activos, otros 50 euros más, en concepto de remuneración por derechos de autor.

A partir de enero de **2016** el sistema cambia y, aunque continúa establecido el criterio de usuarios activos, la cuantía a pagar es de 0,004 euros pero por títulos disponibles para el préstamo y no por ejemplares. Es decir, si una biblioteca tiene 200.000 títulos pagará 800 euros y si cuenta con 1000 usuarios pagará otros 50 euros más.

6. ¿Quién asume dicha remuneración y quién se encarga de su administración?

En primer lugar, no es el usuario el que tiene que pagar por hacer uso del servicio de préstamo en la biblioteca, sino que es la Administración la que sufraga este gasto. Pero ¿qué Administración proporciona un servicio público si no es pagado con los impuestos de todos los ciudadanos?. Así que, aunque el usuario no tenga que pagar por hacer uso de este servicio en el momento en que retira el libro de la biblioteca, de un modo u otro, lo paga después. Si a esto se une que, precisamente, el presupuesto destinado a bibliotecas públicas de los presupuestos generales del Estado, es cada vez

menor, (en 2014 se redujo a 69,88 millones de euros frente a los 78,42 de 2013) se puede prever que las bibliotecas van a tener difícil adquirir y reponer más obras en el futuro porque no podrán hacer frente a más gastos. Además, de que también repercutirá en el desarrollo de las actividades y programas culturales que hasta ahora venían ofreciendo, por no hablar también de los recortes en el personal.

En segundo lugar, no es el Ministerio el que se encarga de la gestión de la remuneración a los autores, sino que esto queda en manos de las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor, como CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos).¹²

7. Gestión colectiva del derecho de autor: Las Sociedades de Gestión de Derechos de Autor.

Por gestión colectiva se entiende el ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos por entidades que, sin ánimo de lucro, actúan en representación de los titulares de derechos y en defensa de los intereses de estos últimos y que velan para que los creadores reciban la remuneración que les corresponde por el uso de sus obras.

El derecho de autor está contemplado en la Declaración Universal de Derechos Humanos al establecer que "toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora" (Naciones Unidas, 1948). Como es materialmente imposible que un autor, de forma individual, pueda saber y gestionar los derechos que se derivan del uso que se hace de sus obras en cualquier parte del mundo, surgen las entidades de gestión que se encargan de hacerlo por él.

Estas entidades, que en España se han constituido como asociaciones de titulares de derechos de propiedad intelectual, deben contar con la autorización del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para funcionar como tales. Hasta la fecha, el Ministerio ha autorizado ocho entidades de gestión y de éstas, cuatro son las que se encargan de gestionar los derechos de los autores: SGAE (Sociedad General de Autores y Editores), CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos), VEGAP (Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos) y DAMA (Derechos de Autor de Medios Audiovisuales).

7.1. Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), es la asociación sin ánimo de lucro de autores y editores de libros, revistas y otras publicaciones, editadas en cualquier medio y soporte, que se encarga de defender y gestionar de forma colectiva sus derechos de propiedad intelectual de tipo patrimonial (reproducción, transformación, comunicación pública y distribución). Fueron autorizados para ello en

¹² CEDRO fue autorizada en 1988 por el Ministerio de Cultura para llevar a cabo esta actividad.

1988 por el Ministerio de Cultura, al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual. Cuenta con 23.022 socios, de los que 21.011 son autores y 2.011 editoriales. Pero además, por mandato legal y, para la gestión colectiva del derecho de compensación por copia privada, también representan a los autores y editores que no son miembros de la Entidad, así como a autores no socios para la gestión colectiva del derecho de préstamo y a los autores y editores asociados a las entidades homólogas de otros países con las que tienen firmados convenios de representación recíproca.

Sus funciones son:

- La distribución de las cantidades que correspondan a los titulares de los derechos por el uso de sus obras. Las tarifas las establece CEDRO y no están sujetas ni a la previa ni a la posterior revisión por parte del Ministerio de Cultura. El reparto se hace una vez al año y la remuneración se fija atendiendo al tipo de explotación que se haga de la obra y según lo acordado en el Reglamento aprobado por su Asamblea General de Asociados. Pero de esa cantidad se descuentan varias cantidades que se destinan a la función social que por Ley tiene asignada (el 20% de lo obtenido por copia privada), a un fondo que está recogido en sus Estatutos y que presta servicios a sus miembros y, finalmente, para hacer frente a los gastos de administración.
- Conceder autorizaciones o **licencias** para la utilización de contenidos de las obras de su repertorio. Para ello ha creado la plataforma en línea **conlicencia.com.**, a través de la cual se venden las licencias de pago por uso para fotocopiar y digitalizar libros, revistas y periódicos, así como las licencias anuales adaptadas a empresas, centros de enseñanza e instituciones.
- La Gestión colectiva de la compensación equitativa por **copia privada**.
- **Función social:** prestar servicios asistenciales de formación y promoción para autores y editores.
- La Gestión colectiva del derecho de remuneración por el **préstamo público** en bibliotecas e instituciones similares.
- Proteger y defender los derechos de propiedad intelectual de sus socios ante los tribunales de justicia y otras asociaciones nacionales e internacionales.
- La difusión y la **concienciación** social acerca de los principios del Derecho de Autor.
- La gestión de los derechos de sus socios en **otros países**, en virtud de acuerdos de reciprocidad.

- El Servicio de **localización de titulares** de derechos de autor (escritores, traductores y editoriales) para usuarios.

7.2. Remuneración por préstamo público. Esta remuneración corresponde a los autores cuyas obras se prestan en bibliotecas, museos, archivos, fonotecas, filmotecas y centros similares, según lo regulado por la Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas de 22 de junio de 2007. A los autores que son miembros de la Entidad, se les abona automáticamente la cantidad que les corresponde. Aquellos autores que no son miembros de CEDRO, y que desean percibir la cantidad correspondiente por el uso de sus obras, tienen que solicitarlo.

La remuneración por préstamo se calcula anualmente y se hace efectiva a lo largo del primer semestre del año siguiente. CEDRO solicita a las Administraciones titulares de las bibliotecas públicas, obligadas legalmente al pago, que les remitan los datos necesarios para el cálculo de dicha remuneración y que son los siguientes:

- Número de obras adquiridas con destino a préstamo desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de agosto de 2014, desglosando el número de obras literarias, audiovisuales y sonoras.
- Número de obras adquiridas con destino a préstamo desde el 2 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014, desglosando el número de obras literarias, audiovisuales y sonoras.
- Número de usuarios inscritos y que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo desde el 2 de agosto de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Qué curiosa forma de proceder tienen. Si un autor está en contra de que se cobre un canon por el uso que se haga de sus obras no puede oponerse a ello¹³, es decir, que CEDRO cobra **SÍ** o **SÍ** por todas sus obras, sin que el autor pueda impedirselo. Pero ¿qué pasa con ese dinero que han recaudado en su nombre? Resulta que si el autor quiere llegar a cobrarlo, tiene que ser miembro de esta sociedad o bien solicitarlo. Pero en caso de no ser así ¿qué pasa con la cantidad recaudada en su nombre? ¿a dónde va a parar?. Me parece un sistema muy rígido y unilateral, del que claramente la única beneficiada es CEDRO y lo que me parece aún más vergonzoso, es que este sistema de recaudación no esté supervisado por el Ministerio.

¹³ En el año 2007 ya fueron muchos los que criticaron este pago. Se creó la Plataforma No al Préstamo de Pago y a ella se sumaron numerosos escritores como José Luis Sampedro, Santiago Alba Rico, Nuria Amat, Inma Chacón, Almudena Grandes, Emilio Lledó, Marta Sanz, Maruja Torres o Paul Preston. Eran solo una pequeña parte de una larga lista con más de 120 autores que criticaban el canon.

7.3. ¿Cómo gestiona CEDRO el dinero cobrado por préstamo público?

La cantidad neta a repartir se calculará deduciendo de la recaudación de cada año el 20 % que CEDRO destinará a servicios y ayudas de carácter asistencial en beneficio de los autores. A continuación se detraerá el porcentaje correspondiente al descuento de administración, según lo establecido en el art. 1.4 de su Reglamento de Recaudación.

El reparto de la cantidad neta se llevará a cabo asignando un valor a cada una de las obras susceptibles de recibir remuneración por préstamo¹⁴ de acuerdo con los criterios determinados en su Reglamento.

El importe asignado a cada obra se distribuirá entre los titulares de los valores autorales.

La cantidad procedente de los establecimientos que faciliten información suficiente para reparto se distribuirá entre las obras identificadas, en función del número de préstamos efectuados por cada una de ellas.

La cantidad correspondiente a titulares identificados no localizados quedará pendiente de liquidación de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente.

La cantidad procedente de los establecimientos que no faciliten información suficiente para reparto quedará pendiente de asignación para titulares no identificados, y se le dará el tratamiento y la finalidad legalmente establecida.

Este canon parece haberse hecho a medida de unas sociedades de gestión que, a pesar de que sus Estatutos establecen que actúan sin ningún ánimo de lucro, no dejan de ser sociedades privadas con un afán recaudatorio. Por no hablar, además, de las noticias que sobre ellas han saltado a la luz pública estos últimos años demostrando actividades poco transparentes y de dudosa legalidad. Estas sociedades han estado años presionando para que la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual esté inspirada en la Directiva Europea y el citado canon por préstamo afecte directamente a las instituciones culturales como las bibliotecas, archivos, hemerotecas, etc., de titularidad pública. El informe que elaboró el Comité Económico y Social (1992) sobre la Directiva señalaba que "la utilización de un derecho de préstamo no debería causar perjuicio al funcionamiento de las bibliotecas públicas imponiéndoles costes excesivos" (art. 2.2.2.3)

¹⁴ Como norma general, los derechos de explotación de la obra duran toda la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento. Después, la obra pasa a **dominio público** y podrá ser utilizada sin autorización, siempre que se respete su autoría e integridad. En el caso de una edición concreta de una obra en dominio público, los derechos de explotación del editor duran 25 años.

Incluso el Informe sobre la Gestión Colectiva de Derechos de Propiedad Intelectual, exponía los abusos cometidos por muchas de las sociedades de gestión en el cobro de los derechos de autor y se comprometía a realizar una revisión de sus competencias y establecimientos. Este informe destacaba la posición dominante que estas entidades habían conseguido y que, aseguraba: "reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la aparición de una serie de problemas. Por un lado, el establecimiento de tarifas inequitativas y/o discriminatorias. Por otro, las dificultades para que los usuarios gestionen de modo eficiente sus costes y para que se desarrollen mercados no tradicionales de explotación de obras y prestaciones. Estas dificultades se ven agravadas por la multiplicidad de derechos y entidades, y por la falta de claridad de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en aspectos que son claves en la comercialización de los derechos de propiedad intelectual, todo lo cual incrementa los costes de transacción y negociación de los usuarios, generando un alto nivel de litigiosidad entre oferentes y demandantes, con la consiguiente inseguridad jurídica" (Comisión Nacional de la Competencia, 2009, p. 20).

Ya hemos visto que en España la actividad de las entidades de gestión de la propiedad intelectual es legal, ¿pero hasta que punto su actuación es ética?. Precisamente, la primera sospecha de que la actividad de estas entidades no se corresponde con lo que consideramos comportamiento ético es que son ASOCIACIONES PRIVADAS. Además, para ciertos autores, los propios gobiernos están en connivencia con estas asociaciones. El objetivo, muy sencillo, saquear fondos públicos en favor de asociaciones privadas. El método, también sencillo, mediante tres leyes nacionales y en cuatro cómodos y lentos pasos. Para Javier de la Cueva (2013), abogado y experto en Propiedad Intelectual, los pasos son los siguientes:

El gobierno Español promulga, a sabiendas, una primera norma nacional que es contraria a la legislación europea. En esta norma el propio Estado Español se obliga a pagar a una asociación privada un dinero.¹⁵

El gobierno del Estado espera cómodamente a que cualquier afectado por la primera norma luche judicialmente contra la misma hasta que consiga que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la declare contraria a la normativa europea. Incluso si los trámites se agilizan todo lo posible, el TJUE tardará varios años en dictar sentencia favorable al afectado. Mientras tanto, se sigue pagando a la asociación privada.

Una vez que el Tribunal europeo haya declarado que la primera norma nacional es contraria a la normativa europea, el gobierno del Estado demora todo lo posible la promulgación de una segunda norma nacional en la que adapta su legislación a la

¹⁵ ORDEN de 30 de junio de 1988 por la que se autoriza a la asociación "Centro Español de Derechos Reprográficos" (CEDRO) para actuar como Entidad de gestión de los derechos reconocidos en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual

sentencia europea. Incluso, a veces, ante la inacción del Gobierno debe ser el propio TJUE el que tenga que instarle para que actúe. Hasta entonces, se sigue pagando a la asociación privada.

Finalmente, el gobierno del Estado promulga una tercera norma nacional en la que declara que lo pagado a la asociación privada es irrecuperable.

Estas maniobras políticas pueden parecer pura teoría. Pues bien, en España ya se ha producido en una ocasión, y como les salió bien, ahora estamos asistiendo a la segunda. Los gobiernos del Estado son los del PP y PSOE, que votan conjuntamente leyes nacionales de propiedad intelectual, y las asociaciones privadas son las entidades de gestión de la propiedad intelectual (SGAE, CEDRO, DAMA, VEGAP, AIE, AISGE, AGEDI y EGEDA).

Primera ocasión: el canon digital.

Segunda ocasión: el canon sobre las universidades.

7.4. CEDRO y el canon sobre las Universidades.

Si en la primera ocasión el principal beneficiado fue la SGAE, en esta segunda lo va a ser CEDRO. Así pues, nos centraremos en esta segunda ocasión ya que refleja perfectamente la forma de actuar de CEDRO.

El comportamiento de la asociación CEDRO respecto al Canon de las Universidades ha sido el siguiente:

CEDRO pretendía que las universidades españolas le pagasen los derechos sobre las obras que se digitalizaban y se colgaban en sus campus virtuales. Así que, en el año 2010, solicitó a la Comisión de Mediación de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura que interviniera para lograr un "acuerdo". Se trataba de pagar 5 euros por alumno por copia digital más otros 4,12 euros por copia reprográfica. El importe total al que aspiraba era de 13,5 millones de euros. El reparto entre universidades públicas y privadas se haría conforme a alumnos: un 80% de alumnos de las primeras y un 20% de las segundas. A la universidad pública le tocaría pagar 10,8 millones de euros.

Las universidades, evidentemente, no estaban por la labor y se resistieron al acuerdo que proponía el Ministerio. Argumentaron que la inmensa mayoría de los autores nunca había encargado la gestión de sus derechos digitales a CEDRO. En 2010 las universidades tenían más de 100.000 autores, mientras que CEDRO, según su página web, no llegaba a 20.000 socios. A mayores, el catálogo de REBIUN, la red de

bibliotecas universitarias, señalaba la existencia de unos 29 millones de obras y CEDRO señalaba que su gestión alcanzaba a unos 4 millones de obras.¹⁶

Los recelos de las universidades respecto a la legalidad de los derechos que CEDRO reclamaba se agudizaron cuando al solicitar a CEDRO que mostrara en qué consistían sus derechos y a cuántos autores representaban, ésta abandonó en primavera del año 2011 el proceso negociador con la excusa de que no podía enseñarlos para no vulnerar los derechos de privacidad de sus socios. Esta excusa, además, se comprobó que no era cierta, puesto que en los contratos que CEDRO firma con sus socios, hay una cláusula en la que se permite mostrar los datos para la realización de los fines del contrato.

Tras abandonar este proceso negociador, CEDRO demandó ante la jurisdicción civil a varias universidades. En la demanda que se interpuso se pudo comprobar cómo, mientras las universidades negociaban de buena fe en el Ministerio de Cultura, CEDRO matriculaba detectives en las universidades para luego verificar qué profesor subía textos escaneados a los campus virtuales y levantar acta de tales copias digitales.

Las universidades nunca se negaron a pagar a CEDRO, pero no aceptaban un sistema de tarifa plana que era el que esta entidad exigía, sino que propusieron pagar, tal y como señala la jurisprudencia, por el efectivo uso del repertorio de CEDRO, la cuestión era pagarles por lo que verdaderamente representaban, y no por lo que decían que representaban.

El sistema propuesto por las universidades consistía en lo siguiente: a principio de curso, enviar a CEDRO una relación de obras que los profesores querían utilizar en sus aulas virtuales; CEDRO verificaría entonces cuáles eran las gestionadas por ella y enviarían la factura a la universidad.

Pero CEDRO no aceptaba esta solución, ¿por qué?. ¿Quizás, porque entonces se haría evidente la poca representatividad de esta entidad?. Además, y lo más significativo del actuar habitual de CEDRO, tendría que pagar a cada autor lo suyo, en lugar de meterlo todo en un fondo común y que luego fuera la Junta Directiva quien encargara los estudios de cómo y a quien repartirlo.

Otra particularidad en el funcionamiento de CEDRO se descubrió gracias al procedimiento judicial que ellos mismos habían iniciado. CEDRO había adaptado sus contratos para poder gestionar los derechos digitales en el año 2004 por lo que para tener derechos sobre las obras anteriores a ese año debería haberse realizado una

¹⁶ La sociedad se ampara en la representación universal para reclamar los derechos de autor por todas las obras reproducidas y difundidas. Si las universidades son capaces de poner en duda esa representatividad, la ley quitaría la razón a Cedro. Además, se vería obligada a pagar a cada autor las cantidades exactas por el uso de su obra, cosa que ahora no hace.

ampliación de sus contratos de gestión. Esa labor sería fácil con respecto a las editoriales pero es prácticamente imposible en el caso de autores y traductores, que son los otros titulares de los derechos de un libro.

A todo esto, el Ministerio de Cultura propone una reforma legislativa que modifica la Ley de Propiedad Intelectual. El anteproyecto de ley propone la creación de un límite a la propiedad intelectual que consiste en el derecho de los centros educativos a reproducir las obras de los autores, creando un canon a pagarles a éstos, el canon de las universidades. Ese canon será gestionado obligatoriamente a través de las entidades privadas de gestión, en nuestro caso CEDRO.

Es decir, las universidades tendrán que pagar a CEDRO, que ya hemos visto que gestiona muy pocos autores y obras del total, por el uso de un repertorio que, en su inmensa mayoría, no es suyo.

Al igual que en el caso de la SGAE, esta modificación de la norma va en contra de la legislación europea. Pero da lo mismo si la historia se repite, dentro de muchos años, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare esta excepción ilegal, el gobierno de turno promulgará una norma nacional con la que se impida la recuperación de las cantidades pagadas irregularmente.

El Ministerio, mediante la promulgación de esta reforma de ley, legaliza que se detraiga dinero público para financiar una asociación privada que casi no tiene representación entre los autores y de la que, además, no hay ninguna garantía de que después pague a esos autores. Es más, CEDRO en realidad, no se ocupa de los autores sino que, según sus reglamentos de reparto, cumple con pagar a las editoriales, despreocupándose de si éstas pagan o no después.

Pero con esta reforma también se le otorga a CEDRO la gestión del open access, expropiándose el procomún. Al crear un derecho irrenunciable que obligatoriamente se tiene que gestionar a través de CEDRO, por ley se estaba expropiando el procomún (lo que es de todos y no es de nadie), cuya gestión se entrega a una asociación privada.

Con esta reforma, el Ministerio no sólo está previendo que CEDRO pueda perder los litigios contra las universidades, sino que le otorga toda la gestión del conocimiento escrito, tenga esta asociación privada o no derechos sobre el mismo. El Ministerio “tapa” los flancos débiles que las universidades han puesto de manifiesto al defenderse de la pretensión de CEDRO de cobrarles por unos derechos que la entidad de gestión nunca pudo obtener de los autores, y confiriéndosela por mandato legal.

Y, por último, se produce una situación absurda: las universidades son las mayores productoras de propiedad intelectual en formato libro y artículos; ninguna

editorial dispone de una fuerza creadora de 130.000 autores como la que tienen las universidades. Las leyes de la Universidad y de Economía Sostenible señalan que las universidades son las titulares de la propiedad intelectual que se crea bajo su entorno, por lo que la reforma pretendida por el Ministerio de Cultura obliga a que las universidades, propietarias de esas obras, cedan la gestión de su patrimonio a una asociación privada, CEDRO, para que ésta les cobre una tarifa por publicar en sus propios campus virtuales obras de las que la universidad es la dueña.

La situación es, por lo tanto, muy clara: mientras el Ministerio de Cultura paraliza todos los pagos posibles en becas, en ciencia y en investigación, publica un anteproyecto de ley donde propone una excepción a la propiedad intelectual inexistente en la normativa europea y que obliga al erario público, esto es, a todos nosotros, a pagar 10,8 millones de euros a la asociación privada CEDRO.

8. Todos contra el canon: acciones profesionales reivindicativas y repercusión social

Muchos han sido los debates que ha suscitado el tema del canon por préstamo público en bibliotecas. Desde la aprobación de la Directiva 92/100/CE, hasta la aprobación en nuestro país del Real Decreto 624/2014, no sólo han sido profesionales del sector los que han manifestado su más firme oposición al mismo, también escritores y editores se han opuesto a que se cobrasen derechos por los préstamos de libros efectuados en las bibliotecas públicas.

Esta situación sirve para que muchos profesionales de las bibliotecas tomen conciencia del problema y decidan defender los derechos de las comunidades a las que sirven y, de paso, luchar por la dignidad de su profesión implicándose en la lucha contra los recortes y las políticas antibibliotecarias.

Así pues, es en el año 2004, a raíz del inicio del procedimiento de infracción de la Comisión Europea contra algunos países que no habían aplicado correctamente la transposición de la Directiva, entre ellos España, cuando surgen las primeras movilizaciones.¹⁷

El 16 y 17 de enero de 2004 los diarios El País y El Mundo publicaban la siguiente nota de la agencia de noticias Europa Press: **"Unión Europea: la CE expedienta a España por no remunerar a los autores por el préstamo de sus obras"**.

¹⁷ La plataforma todos contra el canon compuesta por 34 organizaciones legitima su acción social en las 1.004.209 Firmas Individuales recogidas, en el apoyo de 4.368 Organizaciones Sociales (4.368 Colectivos que representan a 1.162.815 ciudadanos), los 29 Ayuntamientos (que aprobaron en 29 Plenos su oposición al Canón Digital y que representan a 1.286.910 ciudadanos),

A partir de este momento las bibliotecas son noticia, como nunca antes, en prácticamente todos los medios de comunicación: ABC, la Voz de Galicia, El Norte de Castilla, La Rioja, El Diario Montañés, Sur Digital, Las Provincias, Heraldo de Soria..., también diferentes diarios electrónicos, medios televisivos locales, programas de radio, blogs, el foro de debate de bibliotecarios y documentalistas IWETEL, todos se hacen eco de la noticia y titulares como **"El pago del canon por préstamo solivianta las bibliotecas"**, **"Las bibliotecas en pie de guerra"**, **"Gravar la lectura"**, **"Bibliotecarios y autores exigen al gobierno que eluda el canon por préstamo de libros"**, son habituales.

Los días 20 y 21 de febrero de 2004 se celebraron las primeras Jornadas contra el préstamo de pago en bibliotecas organizadas por la Biblioteca Pública de Guadalajara. Blanca Calvo, directora entonces de la misma, en su intervención argumentó cuáles eran para ella los derechos fundamentales de un escritor, y que nada tienen que ver con el derecho puramente económico que se esconde tras el canon:

1. El derecho a formarse como lector
2. El derecho a convertirse en creador
3. El derecho a darse a conocer
4. El derecho a ser leído
5. El derecho a perdurar
6. El derecho a formar parte del corpus cultural
7. El derecho a estar en permanente diálogo con los lectores y con otros creadores
8. El derecho a obtener el respeto de la comunidad
9. El derecho a conseguir un valor añadido para sus obras
10. El derecho a obtener una compensación económica por su trabajo

Sin duda son las bibliotecas públicas las que pueden garantizar todos estos derechos, convirtiéndose en las mejores aliadas de los autores.

De hecho, muchos de ellos (más de cuatrocientos) firman en ese mismo año un Manifiesto en el que reivindican su derecho a que sus obras puedan ser leídas de forma gratuita. Defienden la labor de difusión, fomento, apoyo, promoción y preservación que de sus obras hacen las bibliotecas y que redundan directamente en su beneficio. Josefina Aldecoa, Miguel Delibes, Almudena Grandes, Elvira Lindo, Emilio Lledó, Juan Marsé, Luis Mateo Díez, Soledad Puértolas, José Saramago, por citar sólo algunos, entienden que cuando una biblioteca adquiere sus libros ésta ya paga religiosamente los derechos económicos al autor, si además su obra gusta a los lectores muchos la comprarán y recomendarán a otros lectores, y qué mayor satisfacción para un escritor que el que sus libros sean leídos por cuanta más gente mejor.

Mercedes Calzado (2004), en un artículo dedicado al canon de las bibliotecas, recoge las opiniones manifestadas por algunos escritores respecto a este tema:

Para Arturo Pérez Reverte escritor y miembro de la Real Academia Española, está mal que se cobre cualquier canon en las bibliotecas.

Eugenia Rico, finalista en 2004 del VIII Premio Primavera de Novela, manifiesta que lo que hay que hacer es animar a la lectura y no poner impedimentos, teniendo en cuenta además el déficit de lectores que tiene España.

Javier Azpeitia, escritor, editor y filólogo, considera imprescindible que las bibliotecas estén bien surtidas:

[...] cosa que no ocurre en este momento. Y la razón fundamental es la falta de presupuesto. Si del poco que hay, se desvía parte para dárselo a sociedades de gestión que luego se lo hagan llegar a los autores, estamos perdidos. Hay que recordar que en nuestro país la mitad de la población jura que no ha leído un libro y que no lo hará nunca.

Belén Gopegui, novelista y guionista, es partidaria de anteponer los derechos ciudadanos a los derechos individuales de autor.

8.1. Escritores contra el canon

Los escritores son conscientes de la importantísima función social que realizan las bibliotecas públicas y de la deuda que tienen con ellas. Muchos escritores se han formado como lectores precisamente en la biblioteca pública de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, a la que acudían para leer y conocer la obra de otros escritores que lo fueron antes que ellos. Y es gracias a este conocimiento que se convierten en nuevos creadores. Son muchos los que se niegan rotundamente a cobrar un canon por el préstamo de sus libros. Consideran que las bibliotecas prestan un servicio público de primerísimo orden y que es sencillamente inadmisibles que ahora se pretenda hacerles pagar por cada préstamo efectuado. No están dispuestos a permitir que se haga en su nombre, cuando los verdaderos beneficiarios de esta medida serían las grandes editoriales y las entidades gestoras de (supuestamente) los derechos de los autores. Además, se niegan a servir de coartada a esta nueva maniobra de mercantilización de la cultura, y exigen que no se cobre canon alguno por el préstamo de sus libros en su nombre.

En el año 2007¹⁸, y paralelamente a la modificación del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 10/2007, de 22 de junio, los bibliotecarios españoles contrarios al canon bibliotecario constituyen la **Plataforma NO al Préstamo de Pago**, a

¹⁸ Las bibliotecas (el 96% son municipales) y mediatecas españolas prestaron ese año 44 millones de obras, en su mayoría (30 millones), libros.

la que siguen uniéndose más escritores. José Luis Sampedro (2007) se opone a que se cobre un canon por el préstamo de sus obras en su nombre:

Personalmente prefiero que me lean, y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña. ¡NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS!.

8.2. Editores contra el canon

También son muchos los editores que no están de acuerdo con este canon y firman su propio Manifiesto (2007)¹⁹, en el que denuncian que para ellos la Directiva 92/100 "constituye un ataque a uno de los pilares del derecho de autor: el sistema de excepciones que garantiza la utilidad social de la propiedad intelectual –y, así, su legitimidad–, y que tradicionalmente ha amparado, entre otros usos, el préstamo bibliotecario". Son conscientes de que si se obliga a las bibliotecas a pagar este canon se reducirán los presupuestos que tienen destinados a la compra de libros y esto afectará especialmente a aquellas ediciones minoritarias que a pesar de tener un gran valor bibliográfico, no alcanzan el mismo valor en el mercado editorial, pero que sí tienen asegurado su lugar en la biblioteca.

Hoy día podemos encontrar todas las novedades editoriales expuestas en las librerías y grandes superficies comerciales, sin embargo no permanecen allí eternamente, ya que la moda y el mercado marcan la oferta editorial. Pero en la biblioteca sí tiene cabida lo no comercial, lo poco conocido, lo experimental y lo más importante, no venden libros sino que los prestan. Este acto, el de prestar un libro y que éste una vez devuelto vuelva a ser prestado, es uno de los valores sociales principales de las bibliotecas, el de compartir todo el conocimiento que albergan con todos los ciudadanos sin restricciones.

Ya no son los escritores de siempre los número uno en ventas. Escritores como Pérez Reverte, Muñoz Molina, Julia Navarro..., dan ahora paso a personajes famosos que nada tienen que ver con la gran literatura, sino con el puro entretenimiento y espectáculo, tentados sin duda por editoriales que buscan alcanzar cifras de ventas increíbles.

Vargas Llosa (2012) habla de banalización de la cultura refiriéndose a que ahora son el mercado y las modas los que imponen el éxito o fracaso de un libro. "Lo que

¹⁹ Fueron 14 las editoriales que firmaron el Manifiesto exigiendo al Ministerio de Cultura y al Gobierno de España que emplee todos los recursos a su alcance para evitar la aplicación de la directiva 92/100 estableciendo las alianzas necesarias con otros países de la UE cuyos gobiernos se han manifestado en contra de esta medida.

tiene éxito y se vende es bueno y lo que fracasa y no conquista al público es malo" escribe el premio Nobel.

Para el filósofo, escritor y profesor de de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Rafael Argullol (2015) "(...) el mundo ha optado, al parecer, por desembarazarse de la cultura de la palabra pese a poseer índices de alfabetización escolar sin precedentes (...) además, la inmensa mayoría de los libros que se leen son de pésima calidad..."

El editor Javier Azpeitia, preguntado en una entrevista sobre el canon, argumenta:

Nuestro sistema bibliotecario es ínfimo comparado con el de los países del entorno y lo que necesita es un aumento de presupuesto... y No instituciones participadas por los que somos editores y autores, como Cedro, en vez de centrar sus esfuerzos en exigir que esas instituciones prosperen y funcionen o en debatir y aportar soluciones prácticas, como deberían, se dedican principalmente a perseguir a ciegas bolsas de dinero del presupuesto cultural, como esta del canon de bibliotecas, para repartirlas entre sus asociados y engrosar al tiempo sus cuentas. Hechos así son muy decepcionantes, al menos para mí. (2010)

Todo esto unido al hecho de que España es uno de los países de la Unión Europea con menor gasto social en bibliotecas y más atrasado en cuanto a indicadores de lectura, hace que además los editores pidan al Ministerio de Cultura y al Gobierno de España que hagan todo lo necesario para que no se aplique la Directiva europea estableciendo las alianzas necesarias con otros países miembros de la Unión Europea que se han manifestado en contra de la misma.

8.3. Asociaciones de bibliotecarios contra el canon

8.3.1. La Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID). Para esta asociación considerar que el acto de sacar un libro en préstamo de una biblioteca puede causar un grave perjuicio a los autores por la utilización de sus obras, es partir ya de un argumento completamente erróneo. Sobre este tema trabaja el Grupo Bibliotecas y Propiedad Intelectual, que lleva años estudiando la legislación en materia de derechos de autor. Han elaborado numerosos informes y estudios en los que defienden, con argumentos jurídicos y datos reales, la postura del sector bibliotecario, y dejan claro que esta defensa no tiene porqué suponer, en ningún caso, un enfrentamiento entre los autores y el sector bibliotecario. Igual de lícitos son los intereses que defienden los autores como los intereses de los ciudadanos. Y es en esta línea de intentar buscar un equilibrio que satisfaga a todas las partes implicadas, en la que quiere seguir trabajando FESABID y

otras organizaciones bibliotecarias internacionales de las que es miembro como: IFLA y EBLIDA.

En opinión de José Luis Magro (2003), miembro del Grupo de Trabajo Propiedad Intelectual, las trasposiciones nacionales de la Directiva dejan poco margen de actuación sobre la misma y propone que:

Las sociedades de gestión de derechos empleen sus esfuerzos ante la Administración para que se eleven los presupuestos de adquisiciones disponibles para las bibliotecas. Así se beneficiarían a la par autores y usuarios de las bibliotecas. Centrar los esfuerzos de resistencia a la aplicación del canon en modificar la Directiva para hacer que respete a las bibliotecas públicas. (p. 137)

8.3.2. La Federación Española de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD) y a través de su vicepresidente José-María Nogales Herrera, manifiesta ,igualmente, su rechazo a la implantación de este canon "no sólo por lo que supone económicamente para la maltrecha situación de las bibliotecas, si no por cuanto obliga a las bibliotecas a pagar por el mero hecho de prestar aquellos servicios básicos que las leyes les confiere, poniendo así en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público".

8.3.3. La Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), que se encarga de velar por los intereses de las bibliotecas y de los servicios de información y sus usuarios en todo el mundo, mantiene desde hace mucho tiempo la misma posición frente al tema de los derechos de autor y otros derechos afines: los derechos económicos de los proveedores de información deben mantenerse en equilibrio con la necesidad de la sociedad de acceder al conocimiento. Para esta organización es primordial que se defiendan firmemente los límites y excepciones que al derecho de autor se establecieron para determinados establecimientos, con el fin de proteger la necesidad de todos los ciudadanos de acceder a la información, derecho éste fundamental e imprescindible para su educación y desarrollo humano. En pos del interés público, el derecho de préstamo no debe verse restringido por la ley, que lo justifica en que el uso que las bibliotecas públicas hacen de las obras protegidas por el derecho de autor perjudica las ventas. Sin embargo, esta justificación no tiene fundamento demostrado. Al contrario, el préstamo de libros en las bibliotecas públicas siempre ha contribuido a difundir y promocionar las obras de nuevos autores y, por lo tanto, a promover las ventas. Las bibliotecas públicas, en general, son financiadas directa o indirectamente por el Estado, ya sea a nivel nacional o local. El presupuesto con el que cuentan para ofrecer sus servicios suele ser escaso, por lo que no pueden permitirse destinar fondos adicionales para costear este derecho por préstamo público. Ahora bien, si este derecho goza de una financiación independiente, favorece

a los autores sin afectar al presupuesto de las bibliotecas públicas. Los bibliotecarios tienen que ser parte activa en la organización de los planes de préstamo público para que su financiación no proceda de los presupuestos de las bibliotecas. La IFLA apoya la libertad de acceso a la información, y continuará oponiéndose a todas las circunstancias que puedan reducir dicha libertad.²⁰

8.3.4. La Asociación Andaluza de Bibliotecarios (AAB), es clara opositora al préstamo de pago en bibliotecas. Precisamente ahora que las bibliotecas, no sin grandes esfuerzos y siempre con pocos recursos, han conseguido enraizarse en la sociedad, lo que necesitan es más apoyo y no este gravamen, que va en contra del concepto de biblioteca como servicio público y gratuito. Es justo que los autores cobren una remuneración y las bibliotecas ya están contribuyendo a ella cuando adquieren los libros. Además, los conservan cuando han desaparecido de las librerías, los difunden y promocionan entre sus usuarios, organizan actividades encaminadas a fomentar la lectura y crear lectores, lo que está claro que va en beneficio de la venta de libros y, por lo tanto, de los autores.

8.3.5. La Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas, de la que forman parte representantes de todas las Comunidades Autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), además del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, considera que esta nueva tasa supone un nuevo elemento que grava la prestación de este servicio público claramente infradotado. Las bibliotecas públicas en España pasan por una situación crítica, más del 95% son de titularidad municipal, y son los municipios los que están sufriendo especialmente las consecuencias de la actual crisis económica. Por este motivo, no comparte que la necesidad de cumplir con la obligación de retribución a los autores que exige la Unión Europea, tenga que ser asumida por administraciones cuyas competencias son, exclusivamente, la de ofrecer servicios públicos directos a los ciudadanos. En este sentido, los municipios no son competentes en materia de propiedad intelectual. Considera necesario que se modifique el actual Real Decreto por un sistema más simple de interpretar y de aplicar y que sea el Estado quien asuma el pago completo de esta retribución para todos los centros públicos afectados.

8.4. Profesores universitarios españoles contra el pago por préstamo en bibliotecas:

"Como profesores universitarios, investigadores y, por tanto, usuarios de bibliotecas, ante la exigencia de la Comisión Europea de aplicar de forma indiscriminada la normativa comunitaria sobre pago por préstamo de obras, sin

²⁰ Para la IFLA el derecho de préstamo público es fundamental para la cultura y la educación, y debe estar disponible para todos los ciudadanos.

realizar las históricas excepciones representadas por bibliotecas, archivos y otros centros de información e investigación, manifestamos nuestro rechazo a que las bibliotecas, archivos y centros públicos de información deban pagar por el préstamo de obras" (2007). Así comienza el manifiesto al que se adhirieron muchos profesores, y que de forma ininterrumpida ha seguido incorporando nuevas firmas.

Para ellos, que se aplique el canon a estas instituciones es como equiparar a las bibliotecas con entidades comerciales y piden a la Administración que las exima del pago de derechos de autor. Las bibliotecas son el mejor medio para la promoción, creación y difusión de la cultura y el pensamiento de forma gratuita y desinteresada, y se implican en la formación, información y entretenimiento de todos los ciudadanos.

También llegaron quejas de los rectores de las Universidades a través de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La CRUE afirmó en un comunicado que las universidades españolas aportaban cada año más de 131 millones de euros en concepto de proveedores, es decir, recursos de información que incluyen: monografías en papel, audiovisuales, publicaciones periódicas en papel, monografías electrónicas de pago o con licencia, publicaciones electrónicas de pago o con licencia y bases de datos de pago o con licencia. Además de que las universidades cuentan con 100.000 autores, como son los profesores universitarios, que no perciben un euro en compensación por sus publicaciones académicas.

8.5. Ayuntamientos contra el Canon

Muchos son los Ayuntamientos²¹ que también se oponen de manera rotunda y tajante al préstamo de pago en bibliotecas públicas sabedores, precisamente, de que si se carga a los presupuestos municipales con un nuevo concepto de gasto, esto supondrá un grave problema a las ya maltrechas arcas locales. A través de la campaña "Tu Ayuntamiento tiene la palabra", impulsada desde la Plataforma contra el Préstamo de Pago en bibliotecas, bibliotecarios y ciudadanos pueden ejercer su derecho constitucional de petición (recogido en el art. 1 en relación con el art. 3 de la Ley Orgánica 4/2001 de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición). Y pueden solicitar que se incluya en el orden del día del primer pleno disponible de su Ayuntamiento la aprobación de una moción en la que:

²¹ La [Federación Española de Municipios y Provincias](#) ha hecho público un documento sobre cómo afrontar el RD 624/2014 por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

- Se solicita al Gobierno de España que declare a las bibliotecas públicas municipales exentas del pago por préstamo atendiendo a la posibilidad recogida en el art. 53 de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE) sobre derechos de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
- Este Ayuntamiento manifiesta su rechazo y disconformidad con el establecimiento de una tasa por préstamo en bibliotecas públicas, e insta al Gobierno de España a pedir la derogación de la Directiva europea que lo regula, a sabiendas de que esa reglamentación provoca igualmente el rechazo de otros países europeos.
- De este acuerdo se dará traslado a las siguientes instituciones: Parlamento Europeo, Ministerio de Cultura, Consejería de Cultura del Gobierno autónomo, Federación Española de Municipios y Provincias, Sociedad General de Autores y Editores, Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA), European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA), Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística (FESABID) y Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD).

Ayuntamiento de Granada. El 21 de julio de 2004 el Pleno del Ayuntamiento acuerda por unanimidad aprobar una Moción conjunta de todos los Grupos Municipales con el apoyo del Ayuntamiento de Granada al actual sistema de préstamos bibliotecarios. Piden que "se mantenga el actual límite de préstamo que contempla la vigente Ley de Propiedad Intelectual en su artículo 37.2 como instrumento eficiente de una política de promoción cultural que, además, está en consonancia con el marco legal creado por la Directiva 92/100/CE sobre alquiler y préstamo de obras en función de sus políticas de promoción cultural, y que también otorga la potestad de eximir a determinados establecimientos de la remuneración de dicho pago".

Ayuntamientos navarros. A finales del año 2005 y durante el 2006 varios ayuntamientos, entre ellos, el de Baztán, el de Valle de Erro y el de Auritz-Burguete presentaron y aprobaron mociones en contra del canon por préstamos bibliotecarios.

Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. "Azuqueca contra el préstamo de pago en bibliotecas públicas". Este es el mensaje que se podía leer en la fachada de la Casa de Cultura de Azuqueca de Henares (Guadalajara), que alberga su biblioteca municipal. Con motivo de la celebración del Día del Libro, el 23 de abril de 2013, el Ayuntamiento puso en marcha una campaña contra el préstamo de pago e, incluso, todos los grupos municipales aprobaron una moción en el Pleno, decididos a plantar batalla en los tribunales mediante recurso contencioso-administrativo, si finalmente el

gobierno central autorizaba el cobro por el préstamo de libros. La concejala de cultura Sandra Yagüe lamentó "que el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes otorgue mayor relevancia a intereses de asociaciones privadas como CEDRO, en lugar de defender una cultura lo más libremente accesible por parte de la ciudadanía". El alcalde y la directora de la biblioteca, Eva Ortiz, leyeron un manifiesto en el que se recogían los argumentos del Ayuntamiento contra la regulación y se aseguraba que el canon "supondría un grave obstáculo a la mejora de nuestras bibliotecas y a su equiparación con las de otros países".

Finalmente, como el canon por préstamo sí fue aprobado, el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares interpuso recurso contencioso-administrativo núm. 874/2014 de fecha 22 de diciembre de 2014, contra el R. D. 624/2014, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. Más concretamente, lo que el Ayuntamiento solicitaba era que se declarara la nulidad del art. 7.3 y de la disposición transitoria del R.D. 624/2014, por infringir el artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE. Como hecho curioso hay que destacar que esta demanda no solo la recurrió CEDRO, como era de esperar, sino que también se personó como parte recurrente la Administración General del Estado, representada por el Abogado del Estado.

La Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó sentencia el 18 de mayo de 2016 (STS 2040/2016). En dicha sentencia el TS desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.

En los fundamentos de derecho de la sentencia el tribunal hace un repaso detallado de las normas legales que regulan el canon por préstamo. Así, cita la Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual que impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor. Esta obligación se matiza en el art. 6.1 de la citada Directiva, que permite establecer excepciones. La transposición de la Directiva se instrumentó a través de la disposición final primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio de la lectura, del libro y de las bibliotecas, cuyo apartado dos modificó el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por R.D. Legislativo 1/1996, de 12 de abril. El Art. 37 titulado Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos enumera en su punto 2 los establecimientos que no necesitan autorización de los titulares de derechos de autor por los préstamos que realicen. El Tribunal cita que el Ayuntamiento impugna directamente el punto 3 del art. 7 que regula el cálculo de la cuantía de la remuneración a los autores por el préstamo de sus obras y fija las bases para la

remuneración a los autores por dichos préstamos, cuando lo cierto es que los argumentos desplegados por el Ayuntamiento se dirigen realmente contra el art. 3, el hecho generador, y en concreto, lo que según el Tribunal, propone realmente el Ayuntamiento es la ampliación de los supuestos que no generan derecho de remuneración, previstos en el punto 2 del art. 3, (las publicaciones oficiales y las publicaciones cuyos autores hayan renunciado expresamente a la remuneración) más que modificar el sistema de cálculo de dicha remuneración. Según el Tribunal, el Ayuntamiento impugna el art. 7.3 porque incluye en la base de la remuneración los tipos de obras que no deben ser objeto de remuneración y que deberían haberse incluido entre las excepciones que establece el art. 3 del R.D., esto es, las publicaciones oficiales y las obras de autores que hayan renunciado a la remuneración, excepciones que debieron incluirse y que al no haberlo hecho infringen la Directiva 2006/115/CE, cuyo art. 6 debe interpretarse en el sentido de que cuando se trate de publicaciones con renuncia a remuneración y publicaciones oficiales, su préstamo debe quedar excluido de remuneración porque precisamente no se causa perjuicio compensable al autor.

Para desestimar el recurso contra el art. 7.3 el Tribunal alega que la inclusión de las dos excepciones citadas no fue aceptada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, es decir, el Departamento proponente de la norma. Sigue diciendo que todas las obras dadas en préstamo generan el derecho a la remuneración excepto en los citados casos exceptuados en el art. 3.2. Estos supuestos no son excepcionales por razón de las obras, sino por circunstancias del préstamo. Para el tribunal, obviamente, toda obra en que existe derecho de autor genera esa remuneración e integra la base de cálculo de la remuneración del art. 7.3 del R.D. impugnado. Para el tribunal es claro que si el Ayuntamiento estaba en desacuerdo con que no se hubieran establecido esas excepciones, debió impugnar el art. 3 y no el 7 del R.D., ya que este no puede sino establecer como base de la remuneración esas obras dadas en préstamo en casos distintos de los préstamos exceptuados. El art. 7.3 aplica una de las variables de la remuneración a las obras no exceptuadas de remuneración, y como el art. 3 no establece excepción a las publicaciones oficiales o las obras cuyo autor haya renunciado a la remuneración, es obvio que ha de integrar la base de cálculo de dicha remuneración.

El Tribunal tampoco le da la razón al Ayuntamiento cuando éste sostiene que el art. 6 de la Directiva 2006/115/CE debe necesariamente interpretarse en el sentido de que cuando se trate de publicaciones con renuncia a remuneración y publicaciones oficiales, su préstamo debe quedar excluido de remuneración precisamente porque no causa perjuicio compensable al autor. Para el Tribunal de la Transposición de esa Directiva llevada a cabo por la disposición final primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, resulta que debe existir remuneración y puede ser fijada libremente, pero no ampara excepciones salvo las debidamente

justificadas establecidas por la ley. Esta sólo las permite para los préstamos interestablecimientos del art. 2 del R.D. impugnado, los efectuados a personas con discapacidad, y las consultas in situ en dichos establecimientos, ya que, en realidad, no son préstamos. Sigue diciendo que se está tratando de impugnar una norma reglamentaria que no puede efectuar más exclusiones que las permitidas por la ley de la que trae causa. No cabe que una disposición reglamentaria establezca una excepción a la obligación de remuneración que no prevé la ley ni autoriza al Reglamento a hacerlo. Por tanto, el Reglamento respeta la ley que transpone la Directiva. Dado que ha de establecerse una remuneración compensatoria del perjuicio, la base de la remuneración han de ser las obras prestadas sujetas a derecho de autor, que es el que ha de ser compensado. Para el Tribunal la no inclusión de la exclusión relativa a las publicaciones oficiales no vulnera el art. 6.1 de la Directiva 2006/115/CE. Igualmente el Tribunal dice que frente a lo que alega el Ayuntamiento, la no inclusión relativa a las obras bajo "open access" o acceso abierto tampoco vulnera el art. 6.1 de la citada Directiva. Se trata, para el Tribunal, de un sistema de gestión colectiva que no admite la toma en consideración de decisiones aisladas en determinados autores. El hecho generador de la remuneración, con las excepciones aplicables, así como la tarifa aplicable están definidos en el Reglamento, por tanto, si algún autor desea renunciar a la remuneración, no existirá para él obligación a la percepción de la misma, pudiendo, a tal efecto, renunciar a su cobro. En consecuencia, el R.D. que tampoco establece las excepciones interesadas por el Ayuntamiento recurrente, no infringe aquella Directiva, por lo que el motivo invocado debe ser desestimado.

Finalmente, alegando la misma argumentación que para el art. 7.3, también se desestima la impugnación de la disposición transitoria que recoge la previsión para la actualización de las cuantías a que se refiere el art. 7.3. El Ayuntamiento alegaba que incluía en la base de la remuneración los tipos de obras que, en su criterio, no debían ser objeto de remuneración y que deberían haberse incluido entre las excepciones que establece el art. 3 del R.D., esto es, las publicaciones oficiales y las obras de los autores que hayan renunciado a la remuneración.

La sentencia se adjunta al presente trabajo como Anexo por el indudable interés que tiene ya que crea jurisprudencia.

Esta sentencia ha sido, sin ninguna duda, un golpe fortísimo a todos los organismos públicos que se encuentran en la misma situación que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Implica que serán estos organismos los que deban asumir el pago del canon a las entidades privadas que lo gestionan. Este dinero debe salir de los presupuestos generales que estos organismos controlan, lo que significa que el dinero que irá a las arcas de CEDRO no podrá utilizarse para otros fines. Al perder el pleito el Ayuntamiento, como parte demandante, debe asumir las costas del proceso que, en

este caso, se cifran en 4.000 euros. Azuqueca es un municipio que puede asumir este gasto pero, ¿cuántos Ayuntamientos desistirán de emprender acciones legales contra el canon, visto el precedente, ante la disyuntiva de hacer frente a otros 4000 euros en costas?. Evidentemente, buscar la justicia no está hecho para los pobres.

Esto en cuanto al efecto práctico de la sentencia. Hay otro asunto de la misma que llama mucho la atención. Además de CEDRO también se personó la Abogacía del Estado como parte recurrente. Eso significa que es el propio Estado el que se persona en la causa para hacer valer sus intereses. Sin duda, es un punto de presión para el Tribunal que, dictó sentencia en un plazo inusualmente corto para lo que se estilaba en el Supremo, apenas un año. Este hecho refuerza los planteamientos de Javier de la Cueva, ya expresados en el presente TFG, en cuanto a la connivencia del poder político en lograr que sean entidades privadas quienes velen por los derechos de los autores, aún cuando esta gestión vaya en perjuicio de la mayoría de los ciudadanos.

Deberán ser otras personas, formadas en Derecho, quienes examinen a fondo la Sentencia, pero de su lectura se desprende que fue el propio Gobierno quien no quiso incluir las excepciones, ya que aunque la propuesta para incluirlas fue del Ministerio de Economía y Hacienda, quien la desestimó fue el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

Ayuntamiento de Parla. El grupo municipal IU-Los Verdes presentó el 26 de agosto de 2014 una proposición al Pleno del Ayuntamiento pidiendo la suspensión del canon a abonar por las bibliotecas públicas de Parla por el préstamo de libros. Entre los motivos que exponen están:

- La implantación de este canon no sólo supone una carga a la situación económica de nuestro municipio y nuestras bibliotecas sino que obliga a nuestro Ayuntamiento a pagar por prestar servicios a los que la ley nos obliga, poniendo en peligro la propia esencia de estos espacios y su supervivencia como servicio público.

- Con esta medida, a la que hay que sumarle la continua bajada de presupuestos en los últimos años por parte de la Comunidad de Madrid, se pone en peligro la continuidad de las bibliotecas municipales, tanto el servicio de préstamo como el resto de actividades culturales que se llevan a cabo en estos espacios.

- Las bibliotecas municipales -el 96 % de todas las bibliotecas de nuestro país- son el primer eslabón para el desarrollo de las políticas culturales públicas, puerta abierta al conocimiento, al libre pensamiento y a la cultura, constituyen un requisito básico de la educación permanente, el progreso cultural de la persona y los grupos sociales y han garantizado el acceso libre y gratuito de los ciudadanos a la información y a la lectura.

- Aunque este canon no lo paguen directamente los usuarios, acabará repercutiendo en ellos, con peores servicios y una reducción de la inversión en fondos bibliográficos.

- En definitiva, este canon supone la culminación de una constante persecución a las bibliotecas públicas que lleva años en marcha, primero con constantes reducciones de presupuesto, continuando con la precarización de las condiciones de trabajo de los bibliotecarios y siempre con el objetivo final no declarado de privatizar estos servicios y desentenderse de la gestión y desarrollo de las bibliotecas públicas.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares. El grupo IU presentó el 16 de septiembre de 2014 en el pleno del Ayuntamiento una moción llamando a la insumisión para abonar el nuevo canon por préstamo de libros exigido a las bibliotecas. Para el grupo municipal, la nueva tasa actúa "poniendo en peligro la propia esencia de la biblioteca y su supervivencia como servicio público".

Ayuntamiento de Zaragoza. El 19 de septiembre de 2014 el Grupo Socialista del Ayuntamiento de Zaragoza presentó una moción sobre el RD 624/2014, de 18 de julio. Expusieron que los poderes públicos deben velar por el legítimo derecho que tienen los autores a que se les compense por sus obras pero también deben hacer efectivo el derecho de acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Consideraban que el Real Decreto no ha tenido en cuenta la precaria situación presupuestaria por la que atraviesan los municipios y sus bibliotecas, y este canon hará aún más difícil su supervivencia.

Ayuntamiento de Isla Mayor (Sevilla). El pleno del Ayuntamiento de Isla Mayor presentó el 30 de octubre de 2014 la propuesta de solicitar al Gobierno que las bibliotecas públicas queden exentas del pago por préstamo.

Ayuntamientos y Cabildos isleños han aprobado sendas mociones contra el canon, lo que ha supuesto que el archipiélago canario esté a la cabeza en oposición al préstamo de pago en bibliotecas públicas:

A las mociones aprobadas en los Ayuntamientos de **El Rosario** (Santa Cruz de Tenerife) y **Arucas** (Gran Canaria) en Octubre de 2014, se unen las del Ayuntamiento de **Agüimes** (Gran Canaria) y del **Cabildo de Fuerteventura** en Noviembre del mismo año. El **Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife** se opuso al canon por préstamo en bibliotecas públicas y aprobó en Pleno ordinario, celebrado el 27 de febrero de 2015, una Moción Institucional presentada por Probit (Profesionales de las Bibliotecas de Tenerife) y por Abigranca (Asociación del Personal Bibliotecario de Gran Canaria), manifestando así su rechazo a una medida que pone en riesgo el libre acceso de los ciudadanos a la lectura y a la información. Además, solicitaron al Estado que declare a las bibliotecas públicas "exentas del pago por préstamo sobre el derecho de alquiler y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual".

8.6. Marea Amarilla

El 4 de Febrero de 2012, con un abrazo humano a la Biblioteca Nacional de España y en un acto impulsado por la Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas, comenzó oficialmente el movimiento denominado "Marea Amarilla". Formado por profesionales y usuarios de las bibliotecas, su objetivo era y es frenar los recortes que la administración pública les estaba aplicando y recordar y difundir la trascendencia y el valor de las bibliotecas públicas como espacios de inclusión social²².

En una situación de crisis económica como la que se estaba viviendo en aquel momento, era imprescindible recordar a nuestros políticos que las bibliotecas se convierten para muchos ciudadanos en el único medio que tienen de poder acceder a la información y , en muchas ocasiones, les sirven de ayuda para superar sus problemas.

Es absurdo que desde el propio Ministerio de Cultura se hagan todos los años campañas a favor del fomento de la lectura, siendo uno de los lemas publicitarios más utilizados el de: "Leer nos hace libres", cuando a esa libertad se le está poniendo un precio.

La Ley de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas (2007) señala que:

La lectura y su fomento se consideran una herramienta básica para el ejercicio del derecho a la educación y a la cultura en el marco de la sociedad de la información, de ahí que diversos planes tienden a su fomento y subrayan el interés de la misma en la vida cotidiana de la sociedad, así como el papel fundamental que los medios de comunicación, en especial los de titularidad pública, deben tener en la promoción y el fomento del hábito lector y el libro. (preámbulo)

Después del dinero gastado para promocionar e incitar a la lectura, el gobierno penaliza económicamente a aquellos lectores conseguidos a través de esas campañas, paradójico ¿no?.

En Salamanca, durante la semana del 23 al 29 de abril de 2012, la Biblioteca Pública del Estado junto con las Bibliotecas Municipales y la Facultad de Traducción y Documentación, organizaron diversos actos con lecturas públicas y mesas redondas en los que se puso de manifiesto el papel tan importante que juegan las bibliotecas en la formación de la sociedad. Terminaron la semana haciendo una cadena humana que unió la Casa de las Conchas con la Facultad de Traducción y Documentación.

²² Para visibilizar aún más esta lucha con una auténtica *marea amarilla*, la PCPP pone a disposición de todo el mundo camisetas y chapas reivindicativas, previo canje de su coste de producción

8.7. El Grupo de Activismo Social (GAS) en contra del canon

El 23 de abril de 2007, para celebrar el Día Internacional del Libro, se programó la VIII edición de la lectura continuada de *El Quijote*, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Este acto fue interrumpido por un grupo de jóvenes pertenecientes al Grupo de Activismo Social (GAS) que leyeron un manifiesto en contra del Proyecto de Ley de la lectura, el libro y las bibliotecas, aprobada por el Congreso y que incluye el establecimiento de un canon por el préstamo bibliotecario.

8.8. Firmas contra el préstamo de pago en bibliotecas

Coincidiendo con el Día del Libro de 2007, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas decidió iniciar una campaña de recogida de firmas para que las personas que rechazan el pago de un canon por el préstamo público de libros en bibliotecas pudieran pedir a la Unión Europea la derogación de la Directiva 2006/115/CE (antes Directiva 92/100/CEE), que regula dicho canon²³. Transcurrido el plazo de un año, la Plataforma contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas comunicó que se habían recogido en nuestro país cerca de 100.000 firmas, que unidas a las entregadas anteriormente por este mismo colectivo al Defensor del Pueblo y al Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, totalizan casi 350.000 en contra del denominado préstamo de pago.

La Plataforma, integrada principalmente por bibliotecarios, estima que afecta muy negativamente al servicio que las bibliotecas proporcionan a la sociedad.

Según el colectivo, el dinero destinado al pago del canon no se va a ver compensado por un aumento del presupuesto de que disponen las bibliotecas para la compra de libros y la prestación de servicios a sus usuarios. Los perjudicados serían en el fondo los cientos de miles de españoles que son usuarios de las bibliotecas públicas y, en definitiva, toda la sociedad.

Los miembros del colectivo consideran que la implantación de un canon por el préstamo de libros a las bibliotecas públicas supone un grave perjuicio para la función principal de éstas: facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos a la cultura y a la información.

A sus miembros les preocupa también el hecho de que el canon sea recaudado a la administración por entidades privadas. Según ellos, este hecho supone una perversión de los principios fiscales difícil de asumir desde la defensa de los servicios públicos como mecanismos de garantía de los derechos ciudadanos.

²³ El objetivo era la recogida de un millón de firmas en diferentes países para solicitar la retirada de la Directiva Europea

La Plataforma Contra el Préstamo de Pago en Bibliotecas sigue instando al Gobierno para que promueva en Europa, junto a otros Estados, un debate sobre la posible retirada de una directiva que introduce parámetros mercantiles en una tarea de servicio público que no tiene por qué ser gravada y que, con toda seguridad, será perjudicada en su misión de fomentar la lectura en un país cuyos índices dejan mucho que desear.

9. Bibliotecas públicas y derechos humanos

El concepto y funciones de la Biblioteca Pública se han ido transformando con el paso del tiempo, enriqueciéndose a medida que también han ido cambiando los modos de vida, las necesidades sociales y las nuevas tecnologías. Hoy nos encontramos con una Biblioteca Pública que no sólo apoya la educación, sino que se convierte en centro de información para el ciudadano, centro de fomento de la lectura y de aprendizaje, centro de comunicación e intercambio cultural, centro de cohesión social, centro de estudio e investigación, centro para la recreación y el ocio y de esta manera contribuye a mejorar la calidad de vida de cualquier persona.

El hábito de la lectura es una herramienta fundamental para el desarrollo comunicativo del ser humano, facilita la capacidad creativa, la reflexión y el análisis de la realidad, permite que las personas accedan al conocimiento cultural. Como señala Juan José Millás (2000), "no se escribe para ser escritor ni se lee para ser lector. Se escribe y se lee para comprender el mundo. Nadie, pues, debería salir a la vida sin haber adquirido estas habilidades básicas". En este sentido las bibliotecas cumplen un papel fundamental en el desarrollo de cada persona y, por ende, en el progreso de la comunidad.

Tres son los Manifiestos para la Biblioteca Pública redactados por la UNESCO en menos de 50 años (1948, 1972 y 1994) lo que demuestra que es una institución viva y puerta de acceso universal a la cultura y a la información. De esta forma contribuye a que los ciudadanos se integren en la sociedad y puedan participar de la democracia. Y no podemos olvidar, además, que la UNESCO considera que la biblioteca pública, debe ser, en principio, gratuita.

La Constitución Española (1978) establece que: "los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho" (art. 44.1). Igualmente establece que los poderes públicos promoverán el bienestar de los ciudadanos "mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio" (art. 50).

Sin embargo, tanto lo establecido en la Constitución como los manifiestos y directrices emanados de organismos de las Naciones Unidas referentes a la actividad bibliotecaria, están perdiendo fuerza frente a los acuerdos alcanzados por la

Organización Mundial del Comercio (OMC). Estos son: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC). El primero persigue privatizar servicios que hasta ahora eran públicos y el segundo pretende que los ciudadanos tengan que pagar un precio por acceder a la información y a la cultura.

Así que la OMC desplaza a la Unesco en asuntos de cultura, información y comunicación y la Comisión Europea lo está aceptando sin más. Y el concepto de que la cultura y la información es patrimonio de todos, lo que favorece la igualdad de oportunidades, se convierte en patrimonio únicamente de los más afortunados, en este caso, de los que tienen más dinero.

Todas las declaraciones y los manifiestos internacionales que se han aprobado en favor de la función social que presta la biblioteca tienen como base la **Declaración Universal de los Derechos Humanos**, adoptada por la Asamblea General de la ONU en París el 10 de Diciembre de 1948. En ella se especifica: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión" (art. 19).

Los Derechos Humanos se clasifican en diversos grupos o categorías.²⁴ Dentro de los denominados "Derechos sociales" están: el derecho a recibir una educación, a la formación profesional, y el derecho de acceder a la información y al conocimiento. Dentro de los "Derechos culturales" está: el derecho de todo individuo a gozar del amplio conjunto de conocimientos que las bibliotecas albergan.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas (1966) y que entró en vigor en enero de 1976, señala: "(...) el derecho de toda persona a la educación. Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales" (art. 13). Igualmente, reconoce el derecho de toda persona a:

- a) Participar en la vida cultural; b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales

²⁴ los derechos humanos son imprescriptibles, inalienables, irrenunciables, inviolables, universales, efectivos, interdependientes y complementarios. Y pueden dividirse en dos grupos fundamentales: los derechos civiles y políticos, por una parte, y los derechos económicos, sociales y culturales, por otra. Diversos autores españoles nos dicen que el derecho de los ciudadanos a la existencia y acceso a las bibliotecas se circunscribe a la segunda división. Las bibliotecas, y en particular, la biblioteca pública están asociadas a un trinomio elemental que se corresponde con la naturaleza, finalidad, características y enfoques presentes en su concepto. Esos tres componentes esenciales son *información-lectura-cultura*. Y cada uno de ellos se interrelacionan para sustentar un enfoque de la institución basado en los derechos humanos, comenzando por su primer elemento: el acceso universal a la información.

que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora". (art. 15)

Es imprescindible que los bibliotecarios sigamos teniendo como referente aquellos documentos que asignan a la biblioteca el papel fundamental de impulsar el fomento de los derechos humanos y los valores democráticos. Algunos de los más importantes son:

- El Manifiesto IFLA/UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas (1994) establece que:

la libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, la cultura y la educación. (párrafo 1)

- La Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna (1998) reconoce como una de las tareas básicas de las bibliotecas públicas: "ofrecer a la ciudadanía activa una información básica imprescindible al alcance de todos... de esta forma, contribuyen a construir una sociedad de la información democrática, abierta y transparente".

- La Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual (1999) afirma que: "las bibliotecas contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la libertad intelectual y ayudan a salvaguardar los valores democráticos básicos y los derechos civiles universales".

- Las Pautas del Consejo de Europa y EBLIDA (2000) sobre legislación y política bibliotecaria en Europa señalan la importancia que tienen las bibliotecas en la democratización de los Estados, así como la:

necesidad de dedicar un esfuerzo conjunto a la formulación de una serie de principios acordes con los valores democráticos y compatibles con los principios constitucionales de los Estados miembros, que puedan inspirar la elaboración de sus políticas en materia de legislación y política de bibliotecas. Estas políticas deben destacar el papel de los servicios bibliotecarios como factor necesario para el mantenimiento y el desarrollo de la democracia.

- Las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas (2001), en su punto 1.3 dice que: "las bibliotecas desempeñan un importante papel en el progreso y el mantenimiento de una sociedad democrática...". Igualmente, en el punto 1.4 se afirma que: "la biblioteca pública contribuye a la creación y el mantenimiento de una sociedad bien informada y democrática...". En su punto 3.8

atribuye a las bibliotecas públicas la función de instrumentos para la igualdad de oportunidades que "deben posibilitar el acceso de todos los ciudadanos a la información para que puedan así desenvolverse a escala local, adquirir datos esenciales sobre el proceso democrático y participar de forma positiva en una sociedad cada vez más global".

- La Declaración de Glasgow sobre las Bibliotecas, los Servicios de Información y la Libertad Intelectual (2002), que conmemora el 75º aniversario de la IFLA, afirma que las bibliotecas y los servicios de información

contribuyen al desarrollo y mantenimiento de la libertad intelectual y ayudan a salvaguardar los valores democráticos y los derechos civiles universales. En consecuencia, están comprometidos a ofrecer a sus usuarios acceso sin restricción a recursos y servicios relevantes y a oponerse a cualquier forma de censura.

- En la Declaración del Palacio de la Magdalena en el marco del "XIX Encuentro sobre la edición. El derecho a la lectura: las bibliotecas", organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2003) se afirma que:

... el derecho a la lectura tiene, en las bibliotecas públicas, su máxima expresión de garantía. En un mundo de incesante producción informativa, de infinidad temática y multiplicidad de soportes, las bibliotecas son el instrumento que permite al ciudadano el acceso libre a dicha información, en plena igualdad de oportunidades. Y además asegura que:

Leer es una de las expresiones más genuinas y enriquecedoras de nuestra condición humana, factor de cohesión social e instrumento básico para el desarrollo personal y colectivo.

- El documento "Valores éticos compartidos por las bibliotecas nacionales" (resolución aprobada en la XV Asamblea General de ABINIA, Chile, 2004) destaca entre estos valores "la promoción de una cultura democrática, de libertad y participación ciudadana".

- La Declaración de Buenos Aires sobre Información, Documentación y Bibliotecas (2004), proclamada en el marco del Primer Foro Social de Información, Documentación y Bibliotecas destaca en diversos puntos el papel de las bibliotecas y demás centros de información en la promoción de los valores democráticos, el impulso de la práctica de la democracia, la contribución al desarrollo de los derechos humanos y el compromiso social de los bibliotecarios con la paz:

Las bibliotecas, los archivos y centros de documentación deben ser espacios para contribuir al desarrollo de los derechos humanos y coadyuvar con la preservación de la memoria y recuperación de las tradiciones orales y escritas para asegurar la autodeterminación y soberanía de los pueblos.

- El Manifiesto de Alejandría (2005) comienza declarando que:

Las bibliotecas y los servicios de información contribuyen a la adecuada puesta en práctica de una Sociedad de la Información incluyente. (párrafo 1)

[...]ayudan a conservar los valores democráticos y los derechos civiles universales con imparcialidad y oponiéndose a cualquier forma de censura. (párrafo 3)

Igualmente, afirma que :

(...)son vitales para una sociedad de la información abierta y democrática (...) esenciales para una ciudadanía bien informada y un gobierno transparente, así como para la implantación del gobierno electrónico. (párrafo 3)

- El Manifiesto de la IFLA por la Biblioteca Multicultural (2006) reconoce a los sectores más desfavorecidos de la sociedad como los principales beneficiarios de los servicios que ofrece la Biblioteca Pública, asegurando que:

Las Bibliotecas, al servir a intereses y comunidades diversas, funcionan como centros de aprendizaje, culturales y de información. Al tratar la diversidad cultural y lingüística, los servicios bibliotecarios se rigen por su compromiso con los principios de las libertades fundamentales y la igualdad en el acceso a la información y al conocimiento para todos, en el respeto de la identidad y los valores culturales. (párrafo 4)

Así mismo, recalca, que en una sociedad de diversidad cultural y lingüística los servicios bibliotecarios:

(...) incluyen tanto la oferta de servicios a todo tipo de usuarios de la biblioteca como la oferta de servicios bibliotecarios dirigidos especialmente a grupos culturales y lingüísticos tradicionalmente desatendidos. (...) grupos que a menudo sufren marginación en las sociedades con diversidad cultural: minorías, refugiados y solicitantes de asilo, personas con permisos de residencia temporales, trabajadores inmigrantes y comunidades indígenas. (párrafo 6)

En todos estos Manifiestos y Declaraciones aparece claramente como uno de los derechos humanos fundamentales el acceso a la información y al conocimiento, requisito imprescindible para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la libertad de expresión en sistemas de gobierno democráticos. Y la biblioteca, como transmisora de información y en su condición de espacio público comunitario, es la institución que mejor puede garantizar este derecho, poniendo a disposición de la comunidad todos sus recursos y actividades al garantizar la igualdad de oportunidades a todos sus usuarios, sobre todo a los más desfavorecidos. La práctica de la lectura está muy relacionada con la marginación y la exclusión social y esta marginación comienza cuando a las personas se les despoja de las herramientas que les permiten defenderse e integrarse en la sociedad.

Las bibliotecas públicas siempre han trabajado por el libro y la lectura, prestando obras a todo tipo de lectores, de cualquier edad y condición social. Además, son el único lugar donde se puede encontrar un libro una vez que queda descatalogado y fuera de los circuitos comerciales. Realizan una función de marketing permanente y gratuito para los autores ya que todos los libros se catalogan e incorporan a catálogos de libre acceso, elaboran boletines de novedades, guías de lectura con sugerencias y recomendaciones, exponen las novedades en las estanterías, compran lotes de libros para los clubes de lectura. Ponen a disposición de los escritores sus espacios para la presentación y promoción de sus libros, un regalo para autores y editoriales con pocos recursos, con el añadido de que no supone ningún coste para ellos. A estas ya tradicionales funciones que han venido realizando las bibliotecas públicas, hay que añadir las nuevas actividades que están desarrollando para tratar de reducir o eliminar al máximo cualquier tipo de exclusión como consecuencia de la crisis económica que estamos viviendo. De ahí que muchas personas que en la actualidad están desempleadas, encuentren en la biblioteca un lugar en el que buscar ofertas de empleo, formarse y ocupar su tiempo (Gómez Hernández, 2010), sin olvidar, que para muchas de ellas la biblioteca supone un refugio emocional en el que aliviar la situación en la que viven provocada por la crisis económica (Aguilera Giménez, 2013).

La bibliotecas públicas cumplen una función social importantísima y este es el argumento que refuerza, aún más si cabe, el compromiso de la profesión bibliotecaria para seguir trabajando a pesar de la falta de apoyo de las administraciones responsables que siempre les han asignado unos presupuestos muy escasos. Durante los últimos 20 años, no sin dificultades, las bibliotecas en nuestro país han ido avanzando y mejorando, aunque todavía están muy lejos de alcanzar la situación de las bibliotecas de los países europeos más desarrollados. Después de todo el esfuerzo empleado en ir ganando cada vez más lectores, siendo precisamente el servicio de préstamo de libros el más popular y más utilizado, los profesionales de las bibliotecas consideramos que gravar económicamente este servicio es una medida desafortunada que va a conseguir que no se puedan aumentar y renovar las colecciones de libros, ya que el presupuesto destinado para tal fin será menor, lo que, a su vez, influirá en una menor utilización del propio servicio de préstamo, y en consecuencia perderemos la oportunidad de crear nuevos lectores.

La biblioteca pública siempre ha mantenido un alto grado de compromiso con su comunidad en la defensa de los valores informativos, educativos y culturales que representa y para la cual sería difícil encontrar otras alternativas.²⁵

²⁵ podemos decir que la biblioteca pública, además de ser un medio eficaz para informar, un agente social y cívico para la educación, una institución activa, dinámica, democrática, social y cultural, es mucho más que eso, es una institución fundamental y universal.

10. Resiliencia, una habilidad necesaria en los bibliotecarios

La resiliencia, es un término que tiene su origen en la cualidad que poseen algunos metales para flexionarse sin romperse y volver a su estado original. Este concepto se traslada también al ámbito de la psicología y se refiere a la capacidad que tienen los seres humanos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y situaciones adversas, incluso pueden salir fortalecidos de ellas²⁶.

He de reconocer que no conocía esta palabra y, mucho menos, que pudiera aplicarse al ámbito de las bibliotecas. Durante la etapa de selección de la documentación para realizar este trabajo, encontré un artículo muy interesante escrito por el profesor José Antonio Gómez Hernández (2013, p. 54-55) en el que hace alusión precisamente a este término aplicándolo a las bibliotecas: la resiliencia bibliotecaria. Al leerlo, comprendí que es perfectamente extrapolable a nuestro ámbito profesional y, más en la época de crisis, no sólo económica, sino también de valores que estamos viviendo.

Todos, en algún momento de nuestra vida laboral, nos encontramos ante situaciones difíciles que no sabemos cómo afrontar. La biblioteca es un organismo vivo, en continuo cambio, que necesita caminar en paralelo al desarrollo tecnológico, si no quiere estancarse y dejar de ser útil al usuario. También los bibliotecarios hemos tenido que adaptarnos y avanzar, ya que ahora las demandas de nuestros usuarios son cada vez más especializadas y exigentes a lo que ha contribuido Internet y la sociedad de la información. Pero a lo largo de estos años desde que comenzó la crisis económica en el 2008, las bibliotecas han tenido que idear formas para paliar los recortes y las nefastas políticas gubernamentales que les han impuesto si querían seguir dando servicio a sus comunidades. Prueba de ello ha sido el proyecto "Bibliotecas en acción" que recoge las iniciativas puestas en marcha por algunas bibliotecas españolas durante el período 2012/2013 para solucionar la falta de presupuesto y de recursos y que se agrupan en diferentes acciones según el contenido de la iniciativa (Merlo Vega, 2012):

1. Acción profesional: ante la falta de presupuesto la biblioteca busca soluciones para poder seguir ofreciendo los servicios. Por ejemplo con donaciones que hagan los propios usuarios para mantener el equilibrio de las colecciones.

2. Acción comunitaria: los usuarios participan en actividades no bibliotecarias y colaboran económicamente para que la biblioteca siga desarrollando sus actividades. Por ejemplo los propios usuarios se encargan del cuentacuentos.

3. Acción social: la biblioteca ayuda a personas con necesidades económicas. Por ejemplo recogiendo alimentos y material escolar.

²⁶ Se considera que dos factores que favorecen la resiliencia son el sentido del humor y la creatividad

4. Acción política: la biblioteca protesta ante los recortes, reducción de plantilla, cierre de espacios, canon por préstamo. Por ejemplo el caso de la Biblioteca Pública del barrio del Zaidín (Granada) que se consiguió reabrir después de muchos meses de protestas vecinales. Recogidas de firmas contra el presupuesto cero que tienen que afrontar muchas bibliotecas. Protestas legales, como las mociones aprobadas por ayuntamientos, pidiendo que se exima a las bibliotecas de pagar el canon por los préstamos realizados.

5. Acción digital: la biblioteca ofrece servicios y recursos basados en herramientas tecnológicas gratuitas o de escaso coste. Por ejemplo clubes de lectura en la nube, cursos de formación en línea, usan las redes sociales para informar a los ciudadanos y difundir sus actividades y recursos, crean escritorios virtuales enfocados a la búsqueda de empleo.

6. Acción patrimonial: la biblioteca trabaja en el incremento y difusión de las colecciones locales a través de herramientas digitales. Por ejemplo los vecinos aportan a la biblioteca sus archivos fotográficos personales.

7. Acción económica: la biblioteca tiene que ajustar su presupuesto debido a los sucesivos recortes. Por ejemplo se ven obligadas a reducir sus colecciones.

8. Acción ontológica: ante la dejadez y falta de compromiso de los políticos para invertir más en bibliotecas y programas educativos y culturales, surgen protestas y reivindicaciones de un colectivo que defiende más que nunca el valor social, económico, cultural y tecnológico de estas instituciones.

Todas estas acciones demuestran que los bibliotecarios tenemos la fuerte convicción de que los servicios de las bibliotecas públicas son necesarios para garantizar los derechos sociales básicos de los ciudadanos y que "los beneficios asociados a los servicios que ofrecen superan con creces los costes destinados a garantizar su mantenimiento y funcionamiento" (Luria y Pintor, 2013). Y esta convicción es la que nos tiene que seguir ayudando a generar una conciencia social de la biblioteca como centro de aprendizaje abierto con una función muy importante en el fomento de la integración y la igualdad entre los ciudadanos.

En esta sociedad cambiante en la que estamos sumergidos, las bibliotecas deben reinventarse. Todavía son lugares donde se ofrece lectura de libros, cómo no, pero también han de ser centros que planteen alternativas para competir mejor en la era digital. Instituciones donde se puedan utilizar aquellos servicios que para muchas personas serían inaccesibles, porque no pueden tener Internet en su casa o en el móvil. Espacios donde los usuarios encuentran información sobre cuestiones de la vida cotidiana, para lo que son importantes las nuevas alfabetizaciones informacionales (ALFIN), que reduzcan al máximo la posible brecha digital entre los usuarios. Espacios

de encuentro y acogida para los ciudadanos, donde puedan intercambiar experiencias, conocerse, participar de la vida cultural de la comunidad o simplemente donde pasar un rato, porque la biblioteca es de todos y de nadie en particular.

Precisamente sobre todos estos cambios que están afrontando las bibliotecas y que seguirán afrontando en los próximos años, trata el Informe elaborado por el **Grupo estratégico para el estudio de la prospectiva sobre la biblioteca en el nuevo entorno informacional y social** (2013), perteneciente al Consejo de Cooperación Bibliotecaria y que trata de orientar a las bibliotecas en el camino a seguir, con la implicación imprescindible de los profesionales que trabajan en ella. Son diez las tendencias que más van a cambiar en nuestras bibliotecas:

Tendencia 1. Las decisiones y actuaciones de las bibliotecas tendrán que ser más flexibles e integrarse más en las finalidades de las instituciones en que estén integradas.

Tendencia 2. Para que la biblioteca pueda tener un papel más activo dentro y fuera de la institución en la que se integra, es necesario que coopere y colabore con otras instituciones. Debe fomentar su autonomía y carácter único pero, a la vez, debe ser participativa y complementaria.

Tendencia 3. Ante los pocos recursos públicos con que cuentan y que seguirán siendo cada vez menos, es necesario que las bibliotecas busquen nuevas formas de financiación y de ahorro, lo que no exime a la administración titular de su responsabilidad como gestora final del servicio público.

Tendencia 4. Los profesionales han de tener una presencia muy activa en la institución, reivindicar el papel tan importante que adquiere el ejercicio de su profesión en la integración social, democratización y formación de ciudadanos.

Tendencia 5. Las bibliotecas deben reforzar su función de creadoras e integradoras de comunidades, adaptándose a las necesidades de los usuarios, eliminando la brecha digital garantizando las alfabetizaciones múltiples y prestando especial atención a las minorías a través de colecciones especializadas e informaciones locales.

Tendencia 6. Bibliotecas ágora que sirven, no sólo como lugares de desarrollo del conocimiento, sino como espacios para la socialización, el intercambio de experiencias y la participación.

Tendencia 7. Los espacios de las bibliotecas deberán rediseñarse para poder ofrecer nuevos servicios y equipamientos.

Tendencia 8. La educación y el aprendizaje seguirán siendo claves en la función de las bibliotecas, que nos ayudan a buscar y encontrar, a evaluar, rechazar y usar adecuadamente la información.

Tendencia 9. Los servicios de las bibliotecas se adaptan a la información digital ofreciendo un servicio personalizado, fiable y objetivo.

Tendencia 10. Las bibliotecas gestionan fuentes y colecciones híbridas. Defienden el acceso abierto a la información científica, a los recursos educativos y a los recursos patrimoniales.

Y aunque la situación actual no es la ideal para enfrentarnos a estos cambios, por los recortes y el canon impuesto por préstamo de libros, como bien dice Julián Marquina (2014):

(...) hay que poner toda la carne en el asador por nuestros usuarios. Ellos se merecen tener unas bibliotecas dignas, de élite. Unas bibliotecas que se conviertan en su fuente de recursos para el conocimiento y el ocio... Es hora de dejar atrás el miedo y el inmovilismo, la falta de sueños y la falta de visión.

11. Conclusiones

Vivimos en una época de continuos cambios y transformaciones. La irrupción de las nuevas tecnologías en la sociedad de la información está transformando la manera de crear y de difundir el conocimiento permitiendo nuevas posibilidades de acceso y de interacción constante al usuario. Esto supone una gran ventaja, ya que podemos tener toda la información al alcance de nuestra mano, desde cualquier lugar y de forma inmediata. Por otro lado, los avances tecnológicos han hecho que los autores no puedan tener el control de la utilización de sus obras y por eso se están desarrollando medidas legislativas que les permitan tener el derecho sobre las mismas. Pero ¿cómo se están desarrollando y aplicando estas medidas en el mundo bibliotecario? Hemos comprobado, en el desarrollo de este trabajo, cómo las políticas que, en materia de propiedad intelectual, se están implantando en nuestro país y en nuestras bibliotecas redundan en beneficio de intereses privados muy poderosos y no de las necesidades de la población en general. Según nuestra Constitución de 1978 la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual sea su titularidad debería estar subordinada al interés general, pero esto no se está cumpliendo.

Los acuerdos adoptados desde la Organización Mundial del Comercio (OMC) y transpuestos posteriormente a directivas europeas que se imponen a los Estados, están mercantilizando servicios hasta ahora públicos. Prueba de ello son las directivas 92/100/CEE y 115/2006/CE, que gravan el préstamo de libros en las bibliotecas públicas municipales, convirtiendo este servicio, que es básico y el más utilizado, en una transacción comercial. Ésta y otras medidas se están implantando por la presión que ejercen las entidades de gestión de derechos de autor, que con el pretexto de velar por los intereses de éstos, defienden un modelo abusivo y poco ético de gestión patrimonial de estos derechos.

Las bibliotecas públicas han ido adaptándose a los cambios sociales, económicos y tecnológicos, incorporando nuevos servicios y espacios, pero sin perder de vista la función democrática y social para la que fueron concebidas. Como también han ido adaptándose y formándose los profesionales del ámbito bibliotecario, quienes ven en estas instituciones un servicio público de primera necesidad. Y es precisamente gracias a las iniciativas de este colectivo, tan comprometido siempre con su profesión, que muchas bibliotecas públicas están consiguiendo mitigar los efectos de la crisis económica que comenzó en el 2008 y que está teniendo consecuencias muy negativas para muchos de los servicios públicos que forman parte de lo que conocemos como *estado de bienestar*.

La postura adoptada por nuestros gobiernos es la de plegarse a un mercantilismo desmesurado y las decisiones que están tomando, en algunos ámbitos, aunque sean legales, son condenables desde el punto de vista ético ya que no protegen los derechos básicos de los ciudadanos. Este es el caso del enfoque que están dando a los problemas relacionados con la propiedad intelectual obligando a las bibliotecas públicas a pagar un canon, en concepto de derechos de autor, cada vez que prestan un documento, cuando ya lo han pagado al comprarlo. Esto supone una privatización del conocimiento que choca con el derecho de acceso universal a la cultura y a la información. Por razones éticas y en aras del bien común, no es justificable restringir o coartar este derecho por intereses económicos.

Como profesionales, es necesario que demos una respuesta contundente ante los recortes y la vulneración del derecho de acceso a la información. Un buen profesional no es sólo el que tiene una buena formación técnica, también debe tener unos valores personales y éticos, que sumados a unos conocimientos, actitudes y habilidades, le conducen en el desempeño profesional y responsable de su trabajo. Trabajamos a diario con multitud de información, y nuestra misión es hacer que todo ese conocimiento se difunda, que llegue a la mayor cantidad de personas posible que no puede adquirirla por otros medios. También es necesario que los ciudadanos sean conscientes de la gravedad de estas políticas que transforman sus derechos en privilegios, que sólo pueden pagar unos pocos, provocando desigualdades culturales que conllevan a la marginación y al aislamiento social. Nuestros principales aliados son ellos, los ciudadanos, y entre TODOS debemos unir esfuerzos en conseguir que los gobiernos sean plenamente conscientes de que la cultura Sí es un servicio público prioritario, que contribuye a la cohesión social en situaciones de desigualdades económicas y de tensiones en la convivencia.

Los bibliotecarios debemos participar activamente en los cambios que se están produciendo, tratando de buscar las soluciones más adecuadas dentro de nuestras posibilidades. Que nuestra voz se oiga claramente y la sociedad conozca que las

decisiones que nuestros políticos llevan años adoptando están vulnerando sus derechos informativos y culturales. No seamos de los que critican y se quejan, pero luego se mantienen indiferentes ante un panorama nada alentador. No esperemos a que las cosas pasen para dar una respuesta, seamos capaces de adelantarnos a las circunstancias y tomemos la iniciativa en esta sociedad de la información a gran escala.

No somos culpables de la gestión económica que en estos años están realizando los políticos de nuestro país, pero sí debemos ser autocríticos y reconocer que nos hemos mostrado indiferentes ante muchas de sus decisiones. Quizás no hemos sido capaces de demostrarles los verdaderos valores de las bibliotecas públicas y de lo necesarias que siguen siendo en el siglo XXI. No sólo por ser un centro básico para la educación en valores, la cultura y la información de los ciudadanos, sino por ser instituciones esenciales para el fomento de la paz y del bienestar.

Y es que el nivel de desarrollo de un país, como piensan muchos políticos, no se mide exclusivamente por el crecimiento de su economía, sino también por su nivel de desarrollo cultural y social que permite transformar los comportamientos de los ciudadanos para mejorar la convivencia y eliminar las desigualdades sociales.

Las bibliotecas públicas, en general, han sido siempre uno de los servicios más utilizados y apreciados por los ciudadanos, ya que les proporcionan acceso libre, gratuito e imparcial a la información, un derecho recogido en nuestra Constitución.

Así pues, sigamos trabajando y luchando por la defensa de las bibliotecas públicas, por el derecho que tienen todos los ciudadanos a disfrutar de sus servicios de manera gratuita y sin ningún tipo de discriminación, para conseguir una sociedad, no sólo más democrática, sino también una sociedad más justa y más humana.

Bibliografía

- Aguilera Jiménez, M. (2013). Mi biblioteca: mi refugio. El servicio emocional de las bibliotecas públicas en tiempos de crisis. *Mi Biblioteca*, (9)34, 32-37. Disponible en:
<http://www.alonsoquijano.org/mibiblioteca/contenido/sites/default/files/Publicas%20%20MB34.pdf>
- Argullos, R. (2015, 6 de marzo). Vida sin cultura. *El País*. Disponible en:
http://elpais.com/elpais/2015/03/02/opinion/1425310111_943827.html
- Betancur, A. M. (1997). *Biblioteca pública y democracia*. Bogotá: Fundación para el Fomento de la Lectura.
- Bois, G. (2004). *Una nueva servidumbre: ensayo sobre la mundialización*. Granada: Universidad de Granada/Universitat de Valencia
- Calzado, M. R. (2004). El canon de las bibliotecas cada vez más cerca. *Delibros*, 180, 32-34.
- Cobo Suero, J. M. (2003). Formación universitaria y educación para la ciudadanía. *Revista de Educación*, (número extraordinario), 359-375. Disponible en:
<http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre2003/re20031711399.pdf?documentId=0901e72b8125798d>
- Comisión Nacional de la Competencia (CNC) (2009). *Informe sobre la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual*. Disponible en:
<http://www.upv.es/entidades/SJ/info/U0488754.pdf>
- Comisión Europea (CE) (2002). *Informe de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social sobre el derecho de préstamo público en la Unión Europea*. Disponible en:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0502&from=ES>
- Consejo de Europa/EBLIDA (2000). Pautas del Consejo de Europa y Eblida sobre legislación y política bibliotecaria en Europa. *Correo Bibliotecario*, 42, 1-26. Disponible en:
<http://www.mcu.es/correobibliotecario/index.php/cb/article/view/661/643>
- De la Cueva, J. (2013, 20 de marzo). Cómo saquear el erario público con 3 normas nacionales, en 4 pasos, y con la excusa de las publicaciones científicas. [Mensaje en un blog]. Disponible en: <http://naukas.com/2013/03/20/como-saquear-el-erario-publico-con-3-normas-nacionales-en-4-pasos-y-con-la-excusa-de-las-publicaciones-cientificas/>
- De la Cueva, J. (2014, 9 de junio). Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual: cuando el ministerio es enemigo de los autores. [Mensaje en un blog]. Disponible en:

<http://dglab.cult.gva.es/Legislacion/declarabuenosaires2004.pdf>

España (2014). Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. *Boletín Oficial del Estado*, 1 de agosto de 2014, n. 186, pp. 61523-61527. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-8275

España (2016). Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso, Sección 4ª). Sentencia núm. 2040/2016 de 18 de mayo.

García Lorca, F. (1931). Medio pan y un libro: Locución de Federico García Lorca al Pueblo de Fuente de Vaqueros (Granada). *Cultura para la esperanza: instrumento de análisis de la realidad*, 84, 50. Disponible en: <http://www.accionculturalcristiana.org/html/revista/r84/84lorc.pdf>

Gimeno Perelló, J. ; López López, P. ; Morillo Calero, M. J. (coords.) (2007). *De volcanes llena: biblioteca y compromiso social*. Gijón: Trea.

Gómez Hernández, J. A. (2004). Por qué y para qué las bibliotecas en el siglo XXI. En J. Pérez Iglesias (coord.), *Palabras por la biblioteca* (pp. 93-97). Toledo: Consejería de Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Disponible en: <http://eprints.rclis.org/18471/1/GOMEZPALABRASBIBLIOTECA.pdf>

Gómez Hernández, J. A. (2010). Bibliotecas públicas en tiempos de crisis. *Anuario ThinkEPI*, 4, pp. 79-86. Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3263292.pdf>

Gómez Hernández, J. A. (2013). Acción bibliotecaria ahora mismo: motivos, medios y fines. Trabajo presentado en las XVII Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (Jaén, 25 Octubre 2013). Disponible en: http://eprints.rclis.org/20483/1/Gomez_Accion_Bibliotecaria_Jaen_JAAB_2013.pdf

IFLA (1999). *Declaración de la IFLA sobre las bibliotecas y la libertad intelectual*. Disponible en: <http://www.ifla.org/ES/publications/declaraci-n-de-la-ifla-sobre-las-bibliotecas-y-la-libertad-intelectual>

IFLA (2002). *Declaración de Glasgow sobre las bibliotecas, los servicios de información y la libertad intelectual*. Disponible en: <http://www.ifla.org/ES/publications/declaraci-n-de-glasgow-sobre-las-bibliotecas-los-servicios-de-informaci-n-y-la-libertad-intelectual>

IFLA (2005). *Manifiesto de Alejandría sobre bibliotecas: la sociedad de la información en acción*. Disponible en: <http://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-alejandr-a-sobre-bibliotecas-la-sociedad-de-la-informaci-n-en-acci-n>

IFLA/UNESCO (1994). *Manifiesto de la IFLA/UNESCO Sobre la Biblioteca Pública*. Disponible en: <http://www.ifla.org/ES/publications/manifiesto-de-la-ifla-unesco-sobre-la-biblioteca-p-blica-1994>

IFLA/UNESCO (2001). *Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de*

bibliotecas públicas. Disponible en:

<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf>

IFLA/UNESCO (2006). *Manifiesto IFLA/UNESCO por la biblioteca multicultural*. [En línea]. Disponible en: http://www.ifla.org/files/assets/library-services-to-multicultural-populations/publications/multicultural_library_manifesto-es.pdf

López López, P. (2007). Biblioteca y ética ciudadana. *Educación y Biblioteca*, 19(159), 83-88. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2308137>

López López, P. (2010). Crisis y biblioteca pública. *Educación y Biblioteca*, 22(178), 54-56. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3261186>

López López, P. (2013). *Ética y derechos humanos para bibliotecas y archivos*. Madrid: ANABAD.

López López, P. (2014a). Biblioteca y sociedad. *Crónica popular*, 35. Disponible en: <http://www.cronicapopular.es/2014/10/biblioteca-y-sociedad/>

López López, P. (2014b). Función democrática de la biblioteca pública en la sociedad de la información. *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 29(107), 8-25. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/403379>

Luria i Roig, M. ; Pintor González, J. (2013). *El “retorno a la inversión” de la Red de Bibliotecas Municipales de la provincia de Barcelona (2007-2011)*. [En línea]. Barcelona: Gerencia de Servicios de Bibliotecas. Disponible en: http://www.diba.cat/documents/16060163/22275360/ROI_edicio_web_castellano.pdf/1f863db6-db0a-4cf6-af69-d7675cddd2c4

Magro, J. L. (2003). Aplicación del Canon por préstamo en las Bibliotecas. En *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 18(72), 129-158.

Manrique Sabogal, W. (4 de octubre de 2014). Finlandia el país que ama los libros. *El País*. Disponible en: http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/02/babelia/1412266622_185872.html

Marandola, M. (2004). El préstamo en Europa y la Directiva 92/100/CE. *El Profesional de la Información*, 13(6), 450-458.

Marquina Arenas, J. (2014, 20 de octubre). Las 10 áreas que más van a cambiar en nuestras bibliotecas. [Mensaje en un blog]. Disponible en: <http://www.julianmarquina.es/las-10-areas-que-mas-van-a-cambiar-en-nuestras-bibliotecas/>

- Marquina Arenas, J. (2016, 8 de marzo). 10 razones para querer, y casi amar, a las bibliotecas. [Mensaje en un blog]. Disponible en:
<http://www.julianmarquina.es/10-razones-para-querer-y-casi-amar-a-las-bibliotecas/>
- Martínez Valencia, M. (2004). Jornadas contra el préstamo de pago en bibliotecas: crónica de una lucha anunciada, Guadalajara 20 y 21 de febrero de 2004. *Educación y Biblioteca*, 140, 52-55. Disponible en:
http://gredos.usal.es/xmlui/bitstream/handle/10366/119045/EB16_N140_P52-55.pdf?sequence=1
- Martínez Valencia, M. (coord.). (2010). La relevancia social de las bibliotecas en tiempo de crisis. Dossier. *Educación y biblioteca* [En línea], 178, 42-127. Disponible en:
<https://es.scribd.com/doc/77175866/Educacion-y-biblioteca-n-%C2%BA-178-julio-agosto-2010>
- Meneses Tello, F. (2008). Bibliotecas y democracia: el caso de la biblioteca pública en la construcción de una ciudadanía activa. *Anales de Documentación*, 11, 93-127.
- Merlo Vega, J. A. (2012). Acción ante la recesión: el compromiso de las bibliotecas con los ciudadanos. *Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios*, 104, 65-91. Disponible en:
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/123012/1/Merlo_AccionRecesionB AAB.pdf
- Merlo Vega, J. A. (2014). La desazón del canon bibliotecario. *Mi Biblioteca*, 10(39), 12. Disponible en:
http://diarium.usal.es/merlo/files/2014/11/DesazonCanonMiBiblioteca39_oto%C3%B1o14.pdf
- Millás, J. J. (2000, 15 de diciembre). Leer II. *El País*. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2000/12/15/cultura/976834802_850215.html
- Muñoz Molina, A. (2008, 3 de mayo). De una biblioteca a otra. *El País*. Disponible en:
http://elpais.com/diario/2008/05/03/babelia/1209772211_850215.html
- Naciones Unidas (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos: adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948*. Disponible en:
<http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=spn>
- Naciones Unidas (1966). *Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales*. Disponible en:
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>

No pago (2008, Junio 23). [Archivo de vídeo]. Disponible en:
<https://www.youtube.com/watch?v=TWR9FBFIOK4>

Nogales Herrera, J. M. (ca. 2012). *La crisis en las bibliotecas*. [En línea]. Madrid: Anabad. Disponible en:
<http://www.anabad.org/images/documentos/anabad/crisis%20en%20las%20bibliotecas.pdf>

Parlamento Europeo (1998). Resolución del Parlamento Europeo sobre el papel de las bibliotecas en la sociedad moderna. *Métodos de Información*, 5(26-27), 96-101. Disponible en:
<http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/viewFile/372/393>

Pérez Pulido, M. (2004). La enseñanza de la ética y deontología de la información en los estudios universitarios de biblioteconomía y documentación. *BiD: Textos universitarios de biblioteconomía i documentació*, 13. Disponible en:
http://bid.ub.edu/consulta_articulos.php?fichero=13pulid2.htm

Salaberria Lizarazu, R. (2004a). La vuelta al préstamo en 80 medios. *Educación y Biblioteca*, 16(140), 69-71.

Salaberria Lizarazu, R. (2004b). Canon por préstamo bibliotecario: la mata sigue dando. *Educación y Biblioteca*, 16(144), 41-46. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1051143>

Salaberria Lizarazu, R. (2006a). Dossier proposiciones (honestas) y mociones contra el canon por préstamo bibliotecario. *Educación y Biblioteca*, 154, 75-88.

Salaberria Lizarazu, R. (2006b). Mociones contra el canon en ayuntamientos navarros. *Educación y Biblioteca*, 18(154), 87-88. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2033765>

Salaberria Lizarazu, R. (2008). Los Ayuntamientos de Zaragoza y Madrid, contra el canon. *Educación y Biblioteca*, 20(166), 46-47. Disponible en:
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2685625>

Sampedro, J. L. (2007, 2 de marzo). Por la lectura. [Mensaje en un blog]. Disponible en:
<http://noalprestamodepago.org/2007/03/02/por-la-lectura/>

Unión Europea (1992). Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de

autor en el ámbito de la propiedad intelectual. *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* L 346, 27 de noviembre de 1992, pp. 61-66. Disponible en:
<http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0100&from=ES>

Unión Europea (2006). Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual. *Diario Oficial de la Unión Europea* L 376, 27 de diciembre de 2006, pp. 28-35. Disponible en:
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0115&from=ES>

Vargas Llosa, M. (2012). *La civilización del espectáculo*. Madrid: Alfaguara

Fuentes

Bases de datos bibliográficas:

- DIALNET: <https://dialnet.unirioja.es/>

Motores de búsqueda:

- Google
- Google Scholar
- Google Books

Otros recursos:

- GREDOS: repositorio documental de la Universidad de Salamanca:
<http://gredos.usal.es/jspui/>
- Universo Abierto: blog de la Facultad de Traducción y Documentación de la USAL: <http://www.universoabierto.com/>
- CEDRO: <http://www.cedro.org/>
- Plataforma No al Préstamo de Pago en Bibliotecas:
<http://noalprestamodepago.org/>

Anexos

Anexo 1: Manifiesto de autores en defensa del préstamo en bibliotecas

Ante el anunciado proyecto de estipular que los autores y editores cobren derechos por los préstamos de libros efectuados en las bibliotecas públicas, los y las abajo firmantes queremos expresar nuestra más enérgica oposición a una medida que -pese a algunas declaraciones demagógicas al respecto-, incidiría inevitablemente en los ya de por sí exiguos presupuestos de las bibliotecas (como ha sucedido con el IVA y con otros gravámenes recientes).

El argumento de que los autores, al poderse leer gratis sus libros en las bibliotecas, pierden compradores, es una burda falacia. Muy al contrario, las bibliotecas dan a conocer los libros, los promocionan y permiten que estén en circulación durante años, en un momento en que en las librerías solo duran, en el mejor de los casos, algunos meses. Y esto permite mantener viva la presencia de muchos autores que, de otro modo, desaparecerían casi por completo del panorama literario.

Por otra parte, las bibliotecas, tanto por su actividad principal como por sus numerosas actividades secundarias (organización y seguimiento de clubes de lectores, seminarios, talleres, conferencias, exposiciones, encuentros con autores, etc.), fomentan y apoyan la afición a la lectura más que ninguna otra institución pública o privada, lo que también redundaría directamente en beneficio de los autores.

Cuando una biblioteca compra un libro, no solo abona los correspondientes derechos de autor, sino que además invierte espacio, tiempo y recursos en catalogar, preparar para el préstamo y almacenar ese libro, convirtiéndose, de este modo, en la mejor aliada de autores y editores. Exigirles a las bibliotecas que, además, paguen un canon por prestar los libros -es decir, por prestar un servicio público de primer orden-, es, más que un disparate, un ataque contra la cultura.

Anexo 2: Manifiesto de editores contra el canon por préstamo de libros

El Estado español ha iniciado los trámites para incorporar a su legislación la directiva europea 92/100, que obliga a las bibliotecas a pagar por prestar sus libros a los lectores. Esta directiva constituye un ataque a uno de los pilares del derecho de autor: el sistema de excepciones que garantiza la utilidad social de la propiedad intelectual -y, así, su legitimidad-, y que tradicionalmente ha amparado, entre otros usos, el préstamo bibliotecario. Es, asimismo, una norma netamente ideológica cuya

única explicación es el intento irracional de llevar la privatización de los servicios públicos hasta sus últimas consecuencias.

La implementación del canon bibliotecario significará la reducción de los presupuestos que nuestras bibliotecas pueden dedicar a la compra de libros, lo cual afectará especialmente a numerosas ediciones minoritarias pero de gran valor bibliográfico. Todo ello en uno de los países de la Unión Europea con menor gasto social en bibliotecas y más atrasados en cuanto a indicadores de lectura.

Las bibliotecas son compañeras de viaje inseparables de cualquier editorial: como herramienta de trabajo, como memoria de su labor, y como encarnación de la dimensión comunitaria de la literatura. En un país como España, donde hay una producción editorial desmesurada sin relación con el número de lectores, la protección y ampliación de las bibliotecas supone una garantía de que los azares del mercado no condenarán al olvido nuestra labor profesional.

Por eso, los editores abajo firmantes exigimos al Ministerio de Cultura y al Gobierno de España que emplee todos los recursos a su alcance para evitar la aplicación de la directiva 92/100 estableciendo las alianzas necesarias con otros países de la UE cuyos gobiernos se han manifestado en contra de esta medida.

Anexo 3: Manifiesto de profesores de enseñanza

Las bibliotecas no deben pagar por el préstamo de obras.

Como profesores de enseñanza primaria y secundaria, y, por tanto, usuarios de bibliotecas, ante la exigencia de la Comisión Europea de aplicar de forma indiscriminada la normativa comunitaria sobre pago por préstamo de obras, sin realizar las históricas excepciones representadas por bibliotecas, archivos y otros centros de información e investigación, manifestamos nuestro rechazo a que las bibliotecas, archivos y centros públicos de información deban pagar por el préstamo de obras.

Esta medida supondría la consideración de las bibliotecas y los centros públicos de información como entidades comerciales y no como instituciones culturales, necesarias para el desarrollo de los ciudadanos y el ejercicio del derecho a la educación, la información y la lectura que la Constitución Española reconoce.

Creemos que el pago por el préstamo de obras en centros públicos de información implicaría un retroceso en las colecciones de las bibliotecas y otros centros.

En 1998 las bibliotecas públicas españolas gastaban una media de 3,64 euros por habitante, mientras que la media de Unión Europea era de 13,35 euros. La aplicación del canon por préstamo de obras vendría a empeorar la situación actual, ya de por sí preocupante.

Las bibliotecas, como agentes implicadas en la formación, la información y el entretenimiento de los ciudadanos, suponen un inmejorable medio para la promoción de la creación y la difusión de la cultura y el pensamiento, papel que siempre han desempeñado de forma desinteresada. Cualquier carga por el préstamo de sus obras supondría un retroceso en sus servicios y colecciones.

De igual forma, apoyamos las declaraciones de los colectivos y profesionales que ha manifestado su protesta contra la aplicación de la medida del pago por préstamos en bibliotecas, al tiempo que felicitamos a los autores que renuncian a este posible cobro, conscientes de la labor cultural, educativa y social que desempeñan las bibliotecas y los centros públicos de información.

Por este motivo, pedimos a la Administración que haga cumplir la legislación española, que exime del pago de derechos de autor a entidades sin fines lucrativos e instituciones de carácter cultural y científico, y que comunique cuanto antes a la Comisión Europea la exención de este pago, a fin de cumplir la normativa comunitaria.

Anexo 4: Manifiesto del GAS

Disculpen, damas y caballeros, pero interrumpimos este acto tan significativo del día Internacional del Libro para hacer un llamamiento a la ciudadanía y reivindicar los derechos del lector.

En nombre de los mal llamados derechos de propiedad intelectual se está llevando a cabo el mayor ataque a nuestros derechos como ciudadanos, de acceder a la lectura y a la cultura.

La implantación del préstamo de pago en bibliotecas supone considerar a las bibliotecas como entidades comerciales y no como instituciones culturales necesarias para el desarrollo de los ciudadanos y el ejercicio del derecho a la educación, la información y la lectura que reconoce la Constitución Española.

Prestar un libro no es un ataque contra los derechos de autor, sino un acto para preservar la herencia cultural de una sociedad. Se trata de un fondo donde la cultura de una civilización descansa a salvo de las fuerzas del mercado. Acto honroso del cual muchos autores y lectores se enorgullecen y que ha sido manifestado por diversas entidades y personalidades en toda Europa.

Pretender cobrar cada vez que se preste un libro es un acto de piratería, además de un ataque a nuestra cultura.

Las bibliotecas, todas las bibliotecas, son los únicos lugares donde los libros existen de verdad, viven de verdad. Conservémoslas, por favor”.

Anexo 5: José Luis Sampedro. Por la lectura

Cuando yo era un muchacho, en la España de 1931, vivía en Aranjuez un Maestro Nacional llamado D. Justo G. Escudero Lezami. A punto de jubilarse, acudía a la escuela incluso los sábados por la mañana aunque no tenía clases porque allí, en un despachito que le habían cedido, atendía su biblioteca circulante. Era suya porque la había creado él solo, con libros donados por amigos, instituciones y padres de alumnos. Sus “clientes” éramos jóvenes y adultos, hombres y mujeres a quienes sólo cobraba cincuenta céntimos al mes por prestar a cada cual un libro a la semana. Allí descubrí a Dickens y a Baroja, leí a Salgari y a Karl May.

Muchos años después hice una visita a un bibliotequita de un pueblo madrileño. No parecía haber sido muy frecuentada, pero se había hecho cargo recientemente una joven titulada quien había ideado crear un rincón exclusivo para los niños con un trozo de moqueta para sentarlos. Al principio las madres acogieron la idea con simpatía porque les servía de guardería. Tras recoger a sus hijos en el colegio los dejaban allí un rato mientras terminaban de hacer sus compras, pero cuando regresaban a por ellos, no era raro que los niños, intrigados por el final, pidieran quedarse un ratito más hasta terminar el cuento que estaban leyendo. Durante la espera, las madres curioseaban, cogían algún libro, lo hojeaban y veces también ellas quedaban prendadas. Tiempo después me enteré de que la experiencia había dado sus frutos: algunas lectoras eran mujeres que nunca habían leído antes de que una simple moqueta en manos de una joven bibliotecaria les descubriera otros mundos.

Y aún más años después descubrí otro prodigio en un gran hospital de Valencia. La biblioteca de atención al paciente, con la que mitigan las largas esperas y angustias tanto de familiares como de los propios enfermos fue creada por iniciativa y voluntarismo de una empleada. Con un carrito del supermercado cargado de libros donados, paseándose por las distintas plantas, con largas peregrinaciones y luchas con la administración intentando convencer a burócratas y médicos no siempre abiertos a otras consideraciones, de que el conocimiento y el placer que proporciona la lectura puede contribuir a la curación, al cabo de los años ha logrado dotar al hospital y sus usuarios de una biblioteca con un servicio de préstamos y unas actividades que le han valido, además del prestigio y admiración de cuantos hemos pasado por ahí, un premio del gremio de libreros en reconocimiento a su labor en favor del libro.

Evoco ahora estos tres de entre los muchos ejemplos de tesón bibliotecario, al enterarme de que resurge la amenaza del préstamo de pago. Se pretende obligar a las bibliotecas a pagar 20 céntimos por cada libro prestado en concepto de canon para resarcir –eso dicen- a los autores del desgaste del préstamo. Me quedo confuso y no entiendo nada.

En la vida corriente el que paga una suma es porque:

a) obtiene algo a cambio

b) es objeto de una sanción.

Y yo me pregunto: ¿qué obtiene una biblioteca pública, una vez pagada la adquisición del libro para prestarlo? ¿O es que debe ser multada por cumplir con su misión, que es precisamente ésta, la de prestar libros y fomentar la lectura?

Por otro lado, ¿qué se les desgasta a los autores en la operación? ¿Acaso dejaron de cobrar por el libro vendido? ¿Se les leerá menos por ser lecturas prestadas? ¿Venderán menos o les servirá de publicidad el préstamo como cuando una fábrica regala muestras de sus productos?

Pero, sobre todo: ¿Se quiere fomentar la lectura? ¿Europa prefiere autores más ricos pero menos leídos? No entiendo a esa Europa mercantil.

Personalmente prefiero que me lean y soy yo quien se siente deudor con la labor bibliotecaria en la difusión de mi obra. Sépanlo quienes, sin preguntarme, pretenden defender mis intereses de autor cargándose a las bibliotecas. He firmado en contra de esa medida en diferentes ocasiones y me uno nuevamente a la campaña.

¡NO AL PRÉSTAMO DE PAGO EN BIBLIOTECAS!

Anexo 6: Sentencia del Tribunal Supremo 2040/2016

Roj: STS 2040/2016 - ECLI:ES:TS:2016:2040

Id Cendoj: 28079130042016100152

Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso

Sede: Madrid

Sección: 4

Nº de Recurso: 874/2014

Nº de Resolución: 1129/2016

Procedimiento: CONTENCIOSO

Ponente: ANGEL RAMON AROZAMENA LASO

Tipo de Resolución: Sentencia

REC.ORDINARIO(c/d) núm.: 874/2014

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa

Oliver Sánchez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sección Cuarta

Sentencia núm. 1129/2016

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Segundo Menéndez Pérez, presidente

D^a. María del Pilar Teso Gamella

D. José Luis Requero Ibáñez

D. Jesús Cudero Blas

D. Ángel Ramón Arozamena Laso

D. Rafael Toledano Cantero

En Madrid, a 18 de mayo de 2016.

Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo núm. 874/2014, interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES representado por la Procuradora de los Tribunales D^a. Rocío Sampere Meneses, contra el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público.

Han sido partes recurridas el Abogado del Estado en la representación que legalmente ostenta de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO y la entidad

CENTRO ESPAÑOL DE DERECHOS REPROGRÁFICOS ("CEDRO") representada por la Procuradora de los Tribunales D^a Silvia Vázquez Senín.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Arozamena Laso.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la representación procesal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares se ha interpuesto recurso contencioso- administrativo contra el reseñado Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, el cual fue admitido por la Sala, motivando la publicación del preceptivo anuncio en el Boletín Oficial del Estado y la reclamación del expediente administrativo que, una vez recibido, se entregó a la parte recurrente para que formalizase la demanda dentro del plazo de veinte días, lo que verificó con el oportuno escrito de fecha 22 de diciembre de 2014 en el que, después de exponer los hechos y alegar los fundamentos jurídicos que consideró procedentes, terminó suplicando a la Sala se dicte sentencia en la que se declare la nulidad del artículo 7.3 y de la disposición transitoria del Real Decreto 624/2014 , por ser contrarios a normas superiores del ordenamiento jurídico.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado, se opuso a la demanda con su escrito de fecha 19 de febrero de 2015 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derechos que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala dicte sentencia que desestime íntegramente las pretensiones del demandante, imponiendo a la parte actoras las costas del proceso.

TERCERO.- La representación procesal de la entidad Centro Español de Derechos Reprográficos ("CEDRO") se opuso a la demanda con su escrito de fecha 26 de marzo de 2015 en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de derechos que estimó oportunos, terminó suplicando a la Sala dictar en su día sentencia por la que se desestimen íntegramente las pretensiones de la parte demandante, imponiéndole las costas del proceso.

CUARTO.- No estimándose necesaria la celebración de vista pública y no habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se concedió a la representación de la parte demandante el término de diez días para que presentase escrito de conclusiones sucintas de los hechos por el mismo alegados y motivos jurídicos en que se apoyase.

QUINTO.- Habiendo evacuado la parte demandante el trámite de conclusiones mediante escrito presentado en fecha 21 de abril de 2015, se dio traslado del mismo a las partes demandadas para que presentasen sus conclusiones. Trámite que realizaron mediante sus respectivos escritos la representación procesal de la entidad Centro Español de Derechos Reprográficos ("CEDRO") el 12 de mayo de 2015 y el Abogado del Estado el 19 de mayo siguiente, quedando las actuaciones concluidas y pendientes de señalamiento para votación y fallo cuando por turno corresponda.

SEXTO.- Por providencia de 31 de marzo de 2016, se señaló para votación y fallo el día 3 de mayo de 2016, en que tuvo lugar su celebración.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Se impugna el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público (BOE de 1 de agosto de 2014) y, en concreto, se interesa la nulidad del artículo 7.3 y de la disposición transitoria del mismo.

SEGUNDO.- Como señala la Exposición de Motivos del Real Decreto, el artículo 1.1 de la Directiva 2006/115/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 , sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual impone a los Estados miembros de la Unión Europea la obligación de reconocer a los autores el derecho de autorizar o prohibir el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor. Esta obligación se matiza en el artículo 6.1 de la citada Directiva, que permite establecer excepciones a la obligación en lo referente a los préstamos públicos, y siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos, que se podrá determinar libremente por los Estados miembros teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural.

La transposición de la Directiva se instrumentó a través de la disposición final primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio , de la lectura, del libro y de las bibliotecas, cuyo apartado dos modificó el artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En él se relacionan los establecimientos que no precisarán autorización de los titulares de derechos de autor por los préstamos que realicen, y se fijan las bases para la remuneración a los autores por dichos préstamos. Cuanto se refiere a la cuantía de la remuneración y los mecanismos de colaboración necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración entre las distintas administraciones públicas se remite al posterior desarrollo reglamentario. Del mismo modo, la disposición final única del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual habilita al Gobierno para el desarrollo reglamentario de esa ley. Hasta la aprobación de la norma reglamentaria por medio de este real decreto, el régimen aplicable, ha sido el previsto en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, tras la modificación operada también por la disposición final primera de Ley 10/2007, de 22 de junio .

Así, el Real Decreto 624/2014 tiene por objeto el desarrollo reglamentario del derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras en determinados establecimientos abiertos al público, en cumplimiento de lo previsto en

el citado artículo 37 y en la disposición transitoria vigésima del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , siendo su finalidad garantizar el cumplimiento efectivo de la obligación de pago, en desarrollo y ejecución de la normativa comunitaria.

TERCERO.- Finalmente, y antes de examinar los concretos motivos de impugnación invocados en el presente recurso, cabe recordar el citado artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril y modificado después de la transposición de la Directiva a través de la disposición final primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio , de la lectura, del libro y de las bibliotecas.

Dice: " **Artículo 37. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos.**

1. Los titulares de los derechos de autor no podrán oponerse a las reproducciones de las obras, cuando aquéllas se realicen sin finalidad lucrativa por los museos, bibliotecas, fonotecas, filmotecas, hemerotecas o archivos de titularidad pública o integradas en instituciones de carácter cultural o científico y la reproducción se realice exclusivamente para fines de investigación o conservación.

2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública.

3. No necesitará autorización del autor la comunicación de obras o su puesta a disposición de personas concretas del público a efectos de investigación cuando se realice mediante red cerrada e interna a través de terminales especializados instalados a tal efecto en los locales de los establecimientos citados en el anterior apartado y siempre que tales obras figuren en las colecciones del propio establecimiento y no sean objeto de condiciones de adquisición o de licencia. Todo ello sin perjuicio del derecho del autor a percibir una remuneración equitativa".

CUARTO.- El Ayuntamiento recurrente impugna el artículo 7.3 y la disposición transitoria, del Real Decreto 624/2014 , por infringir el artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE .

A los efectos del presente recurso debe tenerse en cuenta, además de los preceptos expresamente impugnados, 7.3 y disposición transitoria, el artículo 3 que regula el hecho generador de la obligación de remuneración compensatoria, entendiendo como tal el préstamo de obras sometidas a derecho de autor, en los términos previstos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . El apartado 2 del precepto excluye determinados supuestos, que no generan el derecho de remuneración por préstamo.

" Artículo 3. Hecho generador.

1. El derecho de los autores a percibir una remuneración se genera por el préstamo de sus obras no incluidas en el dominio público, tal y como se define en el artículo 19.4 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, realizado a través de los establecimientos enumerados en el artículo 2, y ya se trate de originales o de copias de obras sometidas a derechos de autor.

2. No generan el derecho de remuneración por préstamo:

a) La consulta in situ de cualquier tipo de obra en los locales de los establecimientos citados en el artículo 2.

b) Los préstamos de obras que se efectúen entre los establecimientos a los que se refiere el artículo 2.

c) El préstamo en beneficio de personas con discapacidad, en los términos previstos en el artículo 31 bis 2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual".

Por su parte el artículo 7, cuyo apartado 3 es el directamente impugnado, regula el cálculo de la cuantía de la remuneración a los autores por el préstamo de sus obras.

Dispone: **" Artículo 7. Cálculo de la cuantía de la remuneración.**

1. La cuantía global en concepto de remuneración por préstamo en los establecimientos incluidos el artículo 2 se determinará por la administración o entidad titular del establecimiento en los términos previstos en los apartados siguientes, en función de la suma de una cantidad calculada en relación con el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino al préstamo, y de una cantidad derivada del número de usuarios efectivos del servicio de préstamo.

2. La cuantía global en concepto de remuneración por préstamo se calculará anualmente, y se hará efectiva a lo largo del primer semestre del año siguiente. Los datos a utilizar para estos cálculos serán los correspondientes al ejercicio anual precedente.

3. La parte de la cuantía que toma como base el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino a préstamo, se obtendrá multiplicando por 0,004 euros el número de obras que han sido objeto de préstamo en cada establecimiento en el año correspondiente.

4. La parte de la cuantía relativa al número de usuarios efectivos del servicio de préstamo se obtendrá multiplicando por 0,05 euros el número de usuarios inscritos anualmente en cada establecimiento que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año correspondiente".

Recordemos lo que dice a estos efectos la Exposición de Motivos del Real Decreto. Siendo el préstamo la actividad que genera el derecho a la remuneración, los dos criterios utilizados para determinar el cálculo se relacionan directamente con los elementos intervinientes en esa actividad: por un lado, los ejemplares de las obras sujetas a derechos de autor y, por otro, las personas que hacen uso efectivo del servicio de préstamo. El primero de ellos se sustancia a través del cálculo del número de obras protegidas que pone a disposición el establecimiento mediante préstamo (apartado 3 del artículo 7), mientras que el segundo se concreta en la determinación del número de ciudadanos que hacen uso efectivo del servicio de préstamo en el establecimiento en cuestión (apartado 4 del artículo 7).

Este método de cálculo se adecua a lo establecido en el último inciso del artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE, según el cual "los Estados miembros podrán determinar libremente esta remuneración teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural", y se ajusta a la interpretación jurisprudencial realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia de 30 de junio de 2011 (asunto C-271/10, caso VEWA) en lo que se refiere particularmente a la necesidad de considerar también en dicho cálculo un segundo criterio, el del número de prestatarios inscritos en el establecimiento que realiza el préstamo. Dado que la remuneración constituye la contrapartida al perjuicio causado a los autores derivada de la utilización de sus obras en establecimientos accesibles al público sin necesidad de autorización y, teniendo en cuenta la citada jurisprudencia, la fijación del importe de esta remuneración debe vincularse a todos los elementos constitutivos de este perjuicio, teniendo en cuenta no solo la amplitud de la puesta a disposición, a través del número de obras que son objeto de préstamo por parte de los establecimientos, sino también el número de usuarios efectivos del servicio de préstamo.

En resumen, se toma en consideración "el número de obras que han sido objeto de préstamo en cada establecimiento en el año correspondiente" (artículo 7.3) y "el número de usuarios inscritos anualmente en cada establecimiento que hayan hecho uso efectivo del servicio de préstamo en el año correspondiente" (artículo 7.4). Aunque lo cierto es que los argumentos desplegados por el Ayuntamiento se dirigen realmente contra el artículo 3 -hecho generador- y, en concreto, proponiendo la ampliación de los supuestos que no generan derecho de remuneración, más que

contra el sistema de cálculo de la remuneración del artículo 7.3, aunque sea éste del que se solicita su nulidad en el suplico de la demanda.

QUINTO.- En efecto, el Ayuntamiento recurrente alega que durante la tramitación del procedimiento se emitió informe por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 26 de junio de 2013 en el que efectuaba una "sugerencia" consistente en añadir en el artículo 3.2 del proyecto dos excepciones más (las publicaciones oficiales y las publicaciones cuyos autores hayan renunciado expresamente a la remuneración) a las tres que establecía aquel al derecho a percibir los autores remuneración por el préstamo de sus obras (y que antes quedaron recogidas -consulta in situ, préstamos entre establecimientos del artículo 2 y préstamos en beneficio de personas con discapacidad-), sugerencia que no fue aceptada por parte del Departamento proponente de la norma (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Las razones para desatender esa sugerencia obedecen a distintos motivos y constan en las distintas Memorias de Análisis de Impacto Normativo. En síntesis, en el caso de las publicaciones oficiales en las que las Administraciones puedan haber participado como autores, editores o coeditores, porque se está atribuyendo la categoría de autor a una persona jurídica como son la administración general, autonómica o local, y sus entes que la integran, cuando el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual atribuye la categoría de autor únicamente a las personas físicas, aún cuanto el apartado 2 de este mismo artículo reconoce en los casos expresamente previstos en la ley (artículo 8 . Obras colectivas) la protección concedida al autor-persona física. Y también en este supuesto se aplicaría lo señalado para el autor sobre los efectos de su renuncia a la remuneración.

Añade, por lo que se refiere a la exclusión de las publicaciones cuyos autores hayan renunciado expresamente a la remuneración de sus obras, que debe recordarse que la Directiva 2006/115/CE obligó a los Estados miembros a reconocer el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y el préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor y demás objetos mencionados en el artículo 3.1 .

Invoca aquel informe la sentencia de 27 de junio de 2013, asuntos acumulados C-457/11 a 460/11 (caso VG Wort) en la que el TJUE expresa que "(...) un acto eventual mediante el que el titular de los derechos autorizó la reproducción de su obra o prestación protegida no tiene repercusión alguna en la compensación equitativa, ya esté establecida esta última con carácter obligatorio o facultativo, en virtud de la disposición aplicable de dicha Directiva".

Esto es que aún cuando autorice el autor el uso de su derecho o cuando renuncie a percibir una remuneración por el uso de su derecho, dicho acto no tiene repercusión alguna en la remuneración que se debe abonar por la existencia de esta excepción.

Por todo lo anterior, concluye, la eventual renuncia del autor, titular del derecho exclusivo de distribución en su modalidad de préstamo (el editor, coeditor, etc. son simples cesionarios de los derechos del autor) de su derecho a la remuneración que los Estados miembros deben reconocer en su legislación, cuando se establezca la excepción a favor de determinados establecimientos públicos al amparo de lo dispuesto en la Directiva 2006/115/CE, carece de consecuencias a los efectos del cálculo de la remuneración que se debe abonar a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual en tanto en cuanto este derecho es de gestión colectiva obligatoria, tal y como se dispone en el artículo 37.2 , 2º párrafo, del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual .

Además, y frente a la posición del Ayuntamiento recurrente, lo cierto es que hubo un nuevo informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de 9 de diciembre de 2013, sin observaciones, ya a la vista de las razones del Ministerio proponente, y de su rechazo de la propuesta de estas nuevas inclusiones como excepciones al hecho generador.

Consta en el expediente que otras entidades que han efectuado observaciones al proyecto durante su tramitación, han propuesto incluir una excepción semejante a la segunda que sugirió el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, cual es el caso de FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística), observación que -como señala el Abogado del Estado- fue informada por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria en su informe de 14 de febrero de 2013 en el sentido de "No se considera procedente tratar nuevas exclusiones al derecho de remuneración en norma de rango reglamentario; lo adecuado es hacerlo, en su caso, en norma con rango de Ley".

SEXTO.- El Ayuntamiento impugna el artículo 7.3 del Real Decreto 624/2014 , porque, en su opinión, incluye en la base de la remuneración los tipos de obras que no deben ser objeto de remuneración y que deberían haberse incluido entre las excepciones que establece el artículo 3 del Real Decreto, que coinciden con las que sugirió el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esto es, las publicaciones oficiales y las obras de autores que hayan renunciado a la remuneración, excepciones que debieron incluirse y que al no haberlo hecho se infringe la Directiva 2006/115/CE, cuyo artículo 6 debe interpretarse, a su juicio, en el sentido de que cuando se trate de publicaciones con renuncia a remuneración y publicaciones oficiales, su préstamo debe quedar excluido de remuneración precisamente porque no se causa perjuicio compensable al autor.

El Ayuntamiento sostiene que en el artículo 3.2 del Real Decreto impugnado, que establece las excepciones que no generan el derecho de remuneración por préstamo, es decir, integrarían el "Hecho generador" pero no generaría el derecho a remuneración, deberían haberse incluido las excepciones propuestas por aquel Ministerio, pero que no fueron aceptadas, como vimos en el Fundamento anterior.

Lo cierto es que todas las obras dadas en préstamo generan el derecho a la remuneración excepto en los citados casos exceptuados en el artículo 3.2, supuestos exceptuados previstos por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual . Estos supuestos no son excepciones por razón de las obras, sino por circunstancias del préstamo. Obviamente, toda obra en que existe derecho de autor genera esa remuneración e integra la base de cálculo de la remuneración, del artículo 7.3 del Real Decreto impugnado.

Es claro que si el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares está en desacuerdo con que no se hayan establecido esas excepciones, debió impugnar el artículo 3 del Real Decreto, pero no el 7, ya que este no puede sino establecer como base de la remuneración esas obras dadas en préstamo en casos distintos de los préstamos exceptuados. El artículo 7.3 aplica una de las variables de la remuneración a las obras no exceptuadas de remuneración, y como el artículo 3 no establece excepción a las publicaciones oficiales o las obras cuyo autor haya renunciado a la remuneración, es obvio que ha de integrar la base de cálculo de la remuneración.

SÉPTIMO.- Como hemos visto, el Ayuntamiento sostiene que el artículo 6 de la Directiva 2006/115/CE debe necesariamente interpretarse en el sentido de que cuando se trate de publicaciones con renuncia a remuneración y publicaciones oficiales, su préstamo debe quedar excluido de remuneración precisamente porque no se causa perjuicio compensable al autor.

El artículo 6 de la Directiva citada se limita, en lo que aquí interesa, a determinar que:

"Artículo 6. Excepciones al derecho exclusivo de préstamo al público.

1. Los Estados miembros podrán establecer excepciones al derecho exclusivo a que se refiere el artículo 1 en lo referente a los préstamos públicos siempre que los autores obtengan al menos una remuneración por esos préstamos. Los Estados miembros podrán determinar libremente esta remuneración teniendo en cuenta sus objetivos de promoción cultural".

De la trasposición de esa Directiva llevada a cabo por la disposición final primera de la Ley 10/2007, de 22 de junio , de la lectura, del libro y de las bibliotecas, resulta que debe existir remuneración y puede ser fijada libremente, pero no ampara excepciones, salvo las debidamente justificadas establecidas por la Ley.

Esta solo las permite para los préstamos interestablecimientos del artículo 2 del Real Decreto impugnado, los efectuados a personas con discapacidad, ex artículo 31 bis.2 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y las consultas in situ en dichos establecimientos, ya que, en realidad, no son préstamos.

Así dice el artículo 31 bis. " Seguridad, procedimientos oficiales y discapacidades.

(...)

2. Tampoco necesitan autorización los actos de reproducción, distribución y comunicación pública de obras ya divulgadas que se realicen en beneficio de personas

con discapacidad, siempre que los mismos carezcan de finalidad lucrativa, guarden una relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleven a cabo mediante un procedimiento o medio adaptado a la discapacidad y se limiten a lo que ésta exige."

Se está impugnando una norma reglamentaria que no puede efectuar más exclusiones que las permitidas por la Ley de la que trae causa. En efecto, no cabe que una disposición reglamentaria establezca una excepción a la obligación de remuneración que no prevé la ley ni autoriza al Reglamento a hacerlo. Por tanto, el Reglamento respeta la Ley que transpone la Directiva y no establece excepciones a la generación de la remuneración no reconocidas en la Ley ni establecidas en la Directiva y, en consecuencia, no infringe ni la Ley ni la Directiva.

Por otra parte, es indudable que el artículo 7.3 fija la base de cálculo de la remuneración aplicando cada variable al concepto "obras sujetas a derecho de autor". Este concepto se ajusta a la Directiva y a la disposición final primera de la Ley 10/2007. Dado que ha de establecerse una remuneración compensatoria del perjuicio, la base de la remuneración han de ser las obras prestadas sujetas a derecho de autor, que es el que ha de ser compensado.

La Directiva deja libertad a los Estados para fijar la remuneración por los préstamos de las obras sujetas a derechos de autor en los citados establecimientos públicos, sin exceptuar obras, por lo que la Ley española que la transpone no establece excepciones a las obras citadas, ni excluye, por ello, las publicaciones oficiales ni a las obras cuyos autores hayan renunciado a su remuneración, y en los mismos términos se pronuncia, en definitiva, el Real Decreto.

La no inclusión de la exclusión relativa a las publicaciones oficiales no vulnera el artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE. Como apunta la codemandada (CEDRO) el tipo de establecimiento cuya actividad de préstamo constituye el hecho generador de la obligación de pago de la remuneración, se trata en sumayor parte de bibliotecas públicas de las que casi el 96% son bibliotecas cuya titularidad corresponde a las administraciones locales. Y de ellas la mayor parte son bibliotecas de pequeños y medianos municipios, como Azuqueca de Henares. En ese tipo de establecimientos el público toma en préstamo y se lleva a su casa, prácticamente en exclusiva, obras de narrativa y libros infantiles. La actividad de préstamo que se desarrolla en bibliotecas de centros educativos, en los que sin duda, se prestan otro tipo de obras muy diferentes, no genera esta remuneración. Del mismo modo, tampoco la genera la mera consulta en Sala de cualquier tipo de biblioteca.

Por lo tanto, el préstamo de publicaciones oficiales en establecimientos cuya actividad sí está sujeta a remuneración, si es que se produce, sería como mucho, meramente simbólico.

Dicho lo cual, añade la codemandada, aunque el préstamo de publicaciones oficiales sea meramente simbólico en ese tipos de establecimientos, conviene recordar que lo que no son objeto de propiedad intelectual son las disposiciones legales como tales - esto viene a colación del ejemplo utilizado por la actora relativo al código

legislativo del BOE-, pero no puede pretender extenderse esa afirmación a las ediciones u otras manifestaciones de esas mismas disposiciones, o a cualquier otra publicación oficial que sí son objeto de derechos de propiedad intelectual.

En otro orden de cosas y frente a lo que alega el Ayuntamiento, la no inclusión relativa a las obras bajo "open access" o acceso abierto tampoco vulnera el artículo 6.1 de la Directiva 2006/115/CE .

Ya antes quedó citada en este sentido la Sentencia del TJUE, de 27 de junio de 2013, asuntos acumulados C-457/11 a 460/11 (caso VG Wort).

Basta añadir que de conformidad con el artículo 2.2 b) del Real Decreto 624/2014 , "(...) quedan eximidas de la obligación de remuneración: Las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español".

En consecuencia, los préstamos efectuados en las bibliotecas de entidades docentes en las que vierten, se reflejan y repercuten los trabajos de "...los autores de la academia, las universidades...", no generan obligación alguna de pago de remuneración.

Finalmente, en línea con lo argumentado por el TJUE, en su Sentencia de 27 de junio de 2013 , el artículo 37.2 citado dispone que "La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual".

Se trata, por tanto, de un sistema de gestión colectiva que no admite la toma en consideración de decisiones aisladas de determinados autores. El hecho generador de la remuneración -con las excepciones aplicables-, así como la tarifa aplicable están definidos en la Reglamente, por tanto, si algún autor desea renunciar a la remuneración, no existirá para él obligación a la percepción de la misma, pudiendo, a tal efecto, renunciar a su cobro.

En consecuencia, el Real Decreto que tampoco establece las excepciones interesadas por el Ayuntamiento recurrente, no infringe aquélla Directiva, por lo que el motivo invocado debe ser desestimado.

OCTAVO.- Finalmente, la disposición transitoria recoge la previsión para la actualización de las cuantías a que se refiere el artículo 7.3.

Dice: " Disposición transitoria. Aplicación del cálculo de la cuantía de la remuneración.

1. El cálculo de la cuantía que toma como base el número de obras sujetas a derechos de autor puestas a disposición con destino a préstamo, conforme al artículo 7.3, se aplicará a partir del 1 de enero de 2016. Hasta esa fecha el cómputo se obtendrá multiplicando por 0,16 euros el número de obras adquiridas anualmente a tal efecto en cada establecimiento.

2. El cálculo de la cuantía relativa al número de usuarios efectivos del servicio de préstamo, conforme al artículo 7.4, se aplicará desde la entrada en vigor de este real decreto".

Además del artículo 7.3, la parte actora impugna la disposición transitoria del Real Decreto 624/2014 , porque, en su opinión, incluye en la base de la remuneración los tipos de obras que en su criterio no deben ser objeto de remuneración y que deberían haberse incluido entre las excepciones que establece el artículo 3 del Real

Decreto, que coinciden con las que sugirió el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, esto es, las publicaciones oficiales y las obras de autores que hayan renunciado a la remuneración, excepciones que debieron incluirse y que al no haberlo hecho se infringe la Directiva 2006/115/CE, cuyo artículo 6 debe interpretarse necesariamente como antes ya se recogió al examinar la impugnación del artículo 7.3, en el sentido de que cuando se trate de publicaciones con renuncia a remuneración y publicaciones oficiales, su préstamo debe quedar excluido de remuneración precisamente porque no se causa perjuicio compensable al autor, obras que forman parte de la base de cálculo de la remuneración durante el periodo transitorio hasta la vigencia del Real Decreto, el 1 de enero de 2016, momento en que regirá el sistema del artículo 7. Además, ese sistema de cálculo de la citada transitoria sería contrario a la doctrina contenida en la STJUE de 30 de junio de 2011 (Asunto C-271/10, caso VEWA).

La argumentación de este motivo de impugnación de la disposición transitoria citada es la misma expuesta respecto al artículo 7.3, por lo que los motivos para rechazarla son los mismos, y deben reiterarse los razonamientos ya expuestos.

Debe ahora añadirse, únicamente, que parece razonable que al establecerse un nuevo sistema de cálculo de la remuneración cuya vigencia se traslada hasta el 1 de enero de 2016 en la parte relativa al número de obras que han sido objeto de préstamo anualmente en cada establecimiento, ha de fijarse un sistema de cálculo distinto y sencillo hasta esa vigencia, dando tiempo a que los establecimientos establezcan o adapten sus sistemas para determinar las que anualmente son objeto de préstamo y fijar la remuneración a partir de su vigencia. Por tanto, no hay reproche alguno por determinar una base de cálculo temporal y distinta, más fácil de aplicar hasta que entre en vigor el nuevo sistema definitivo, dando tiempo a los establecimientos a adaptarse.

Es natural la previsión de introducir un periodo transitorio de adaptación para el propio sistema de gestión bibliotecaria, con la adaptación del propio personal bibliotecario y de los sistemas informáticos que haga posible el cumplimiento de las nuevas obligaciones impuestas por la normativa europea para la contabilización diferenciada de las obras protegidas objeto de préstamo y a partir del 1 de enero de 2016 con plena vigencia del nuevo sistema. Durante ese breve periodo de tiempo se seguirá teniendo en cuenta, para el cálculo del primer criterio del artículo 7.3 y hasta el 1 de enero de 2016, el número de obras adquiridas anualmente a tal efecto en cada establecimiento (multiplicado por 0,16) en lugar del número de préstamos efectivamente realizados que es el aplicable -ex artículo 7.3- a partir de aquella fecha, una vez concluido el periodo transitorio de adaptación.

En consecuencia, debe también rechazarse la impugnación de la disposición transitoria.

NOVENO.- De conformidad con el artículo 139.1 LJCA se hace imposición de costas al Ayuntamiento demandante, fijándose las mismas en un máximo por todos los conceptos de 4.000 euros -2.000 por cada una de las partes demandadas-.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido :

Declaramos no haber lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el AYUNTAMIENTO DE AZUQUECA DE HENARES contra el Real Decreto 624/2014, de 18 de julio, por el que se desarrolla el derecho de remuneración a los autores por los préstamos de sus obras realizados en determinados establecimientos accesibles al público. Con imposición de las costas a la parte recurrente, con el límite que fijamos en el último fundamento de derecho de esta sentencia.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

Segundo Menéndez Pérez María del Pilar Teso Gamella

José Luis Requero Ibáñez Jesús Cudero Blas

Ángel Ramón Arozamena Laso Rafael Toledano Cantero

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Excmo. Sr. D. Ángel Ramón Laso, estando constituida la Sala en Audiencia Pública, de lo que certifico.

Anexo 7: Las 12 razones para amar las bibliotecas públicas:

1. Las bibliotecas garantizan el acceso a la información de los ciudadanos, necesario para que se puedan tomar decisiones informadas.

2. Las bibliotecas rompen fronteras entre los distintos grupos sociales y dan servicio a todos por igual: niños, familias, personas mayores, inmigrantes, poblaciones diversas, colectivos privados de libertad o con dificultades de acceso, enfermos, invidentes, sin techo, etc.

3. Las bibliotecas allanan el terreno para la igualdad de oportunidades al ofrecer sus servicios a los usuarios sin consideraciones de clase, rango o poder adquisitivo.

4. Las bibliotecas fomentan el pensamiento independiente, valoran al individuo y ofrecen alternativas al pensamiento único al proveer acceso a las tendencias culturales minoritarias.

5. Las bibliotecas estimulan la curiosidad, nutren la imaginación y alimentan la creatividad.

6. Las bibliotecas abren la mente de los niños, porque la biblioteca es el territorio de lo extraordinario. Y estimulan la responsabilidad al ofrecer la posibilidad de tener un carné propio de acceder a todos los materiales que ofrecen.

7. Las bibliotecas devuelven a la sociedad más de lo que cuestan. Hay multitud de ejemplos de negocios y oportunidades surgidos al calor de los recursos bibliotecarios.

8. Las bibliotecas son capaces de construir comunidades al conectar a la gente con la información que necesita y con los demás.

9. Las bibliotecas cohesionan a las familias gracias a sus múltiples actividades de apoyo, como ayudas para hacer los deberes, alfabetización, escuela de padres, extraescolares, cuentacuentos, clubes de lectura y otras muchas.

10. Las bibliotecas son lugares de tolerancia, como lo garantiza el hecho de que cualquier usuario puede encontrar algo ofensivo entre sus materiales.

11. Las bibliotecas ofrecen un espacio que despierta sensaciones de respeto, tranquilidad y placer intelectual similares a las de un santuario. En la biblioteca estamos a solas con nuestros pensamientos, pero compartimos el espacio con desconocidos.

12. Las bibliotecas albergan el pasado, lo preservan. Conocer el pasado sirve para evitar repetir errores en el presente